

## Modificación de la LOU

LOU	Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOU (Texto aprobado por el Congreso el 14-12-2006 y remitido al Senado el 27-12-2006)
<b>TÍTULO PRELIMINAR. De las funciones y autonomía de las Universidades</b>	
<p><b>Artículo 1. Funciones de la Universidad.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio.</li> <li>2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.</li> <li>b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.</li> <li>c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.</li> <li>d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.</li> </ol> </li> </ol>	No se modifica
<p><b>Artículo 2. Autonomía universitaria.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas. Las Universidades privadas tendrán personalidad jurídica propia, adoptando alguna de las formas admitidas en Derecho. Su objeto social exclusivo será la educación superior mediante la realización de las funciones a las que se refiere el apartado 2 del artículo 1.</li> <li>2. En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades comprende:               <ol style="list-style-type: none"> <li>e) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades privadas, de sus propias normas de organización y funcionamiento, así como de las demás normas de régimen interno.</li> <li>f) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación.</li> <li>g) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de la docencia.</li> <li>h) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.</li> <li>i) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades.</li> <li>j) La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes.</li> <li>k) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios.</li> <li>l) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes.</li> <li>m) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.</li> <li>n) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y</li> </ol> </li> </ol>	No se modifica

<p>desarrollo de sus fines institucionales.</p> <p>o) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1.</p> <p>3. La actividad de la Universidad, así como su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.</p> <p>4. La autonomía universitaria exige y hace posible que docentes, investigadores y estudiantes cumplan con sus respectivas responsabilidades, en orden a la satisfacción de las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad, así como que las Universidades rindan cuentas del uso de sus medios y recursos a la sociedad.</p> <p>5. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo de Coordinación Universitaria, corresponde a cada Comunidad Autónoma las tareas de coordinación de las Universidades de su competencia.</p>	
<b>TÍTULO I. De la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades</b>	
<p><b>Artículo 3. Naturaleza.</b></p> <p>1. Son Universidades públicas las instituciones creadas por los órganos legislativos a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 y que realicen todas las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 1.</p> <p>2. Son Universidades privadas las instituciones no comprendidas en el apartado anterior, reconocidas como tales en los términos de esta Ley y que realicen todas las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 1.</p>	No se modifica
<p><b>Artículo 4. Creación y reconocimiento.</b></p> <p>1. La creación de Universidades públicas y el reconocimiento de las Universidades privadas se llevará a cabo:</p> <p>a) Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse.</p> <p>b) Por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse.</p> <p>2. Para la creación de Universidades públicas será preceptivo el informe previo del Consejo de Coordinación Universitaria, en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria.</p> <p>3. Para garantizar la calidad de la docencia e investigación y, en general, del conjunto del sistema universitario, el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, determinará, con carácter general, los requisitos básicos para la creación y reconocimiento de Universidades. Los mencionados requisitos contemplarán los medios y recursos adecuados para el cumplimiento por las Universidades de las funciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 1. Las Universidades podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en modalidad presencial y no presencial; en este último caso, de manera exclusiva o parcial. En el supuesto de la enseñanza no presencial, y en el marco de lo establecido en el párrafo anterior, se adecuarán las previsiones de la presente Ley a las especificidades de esta modalidad de enseñanza.</p> <p>4. El comienzo de las actividades de las Universidades será autorizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado anterior y de lo previsto en la Ley de creación. Las Universidades deberán mantener en funcionamiento sus centros y enseñanzas</p>	No se modifica

<p>durante el plazo mínimo que resulte de la aplicación de las normas generales que se dicten en desarrollo de los artículos 34 y 35.</p> <p>5. Para el reconocimiento de las Universidades privadas, que tendrá carácter constitutivo, será preceptivo el informe del Consejo de Coordinación Universitaria en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria. Lo dispuesto en los apartados 3 y 4 anteriores será de aplicación análogamente a las Universidades privadas.</p>	
<p><b>Artículo 5. Creación de Universidades privadas y centros universitarios privados.</b></p> <p>1. En virtud de lo establecido en el apartado 6 del artículo 27 de la Constitución, las personas físicas o jurídicas podrán crear Universidades privadas o centros universitarios privados, dentro del respeto a los principios constitucionales y con sometimiento a lo dispuesto en esta Ley y en las normas que, en su desarrollo, dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.</p> <p>2. No podrán crear dichas Universidades o centros universitarios quienes presten servicios en una Administración educativa; tengan antecedentes penales por delitos dolosos o hayan sido sancionados administrativamente con carácter firme por infracción grave en materia educativa o profesional. Se entenderán incursas en esta prohibición las personas jurídicas cuyos administradores, representantes o cargos rectores, vigente su representación o designación, o cuyos fundadores, promotores o titulares de un 20 por ciento o más de su capital, por sí o por persona interpuesta, se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el párrafo precedente.</p> <p>3. La realización de actos y negocios jurídicos que modifiquen la personalidad jurídica o la estructura de la Universidad privada, o que impliquen la transmisión o cesión, intervivos, total o parcial, a título oneroso o gratuito, de la titularidad directa o indirecta que las personas físicas o jurídicas ostenten sobre las Universidades privadas o centros universitarios privados adscritos a Universidades públicas, deberá ser previamente comunicada a la Comunidad Autónoma. Ésta, en el plazo que determine con carácter general, podrá denegar su conformidad. La denegación deberá fundarse en el incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo o en la insuficiencia de garantías para el cumplimiento de los compromisos adquiridos al solicitarse el reconocimiento de la Universidad, o en el convenio de adscripción del centro privado a una Universidad pública. En los supuestos de cambio de titularidad, el nuevo titular quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del titular anterior. <del>La infracción de lo previsto en los párrafos anteriores supondrá una modificación de las condiciones esenciales del reconocimiento o de la aprobación de la adscripción. Los mismos efectos producirá la transmisión, disposición o gravamen de los títulos representativos del capital social de las entidades privadas promotoras de las Universidades privadas o centros universitarios adscritos a Universidades públicas, así como la emisión de obligaciones o títulos similares por las mismas, realizadas sin la autorización a que se refieren los párrafos anteriores, con los requisitos allí establecidos.</del></p> <p>4. Los centros universitarios privados deberán estar integrados en una Universidad privada, como centros propios de la misma, o adscritos a una pública.</p>	<p><b>Artículo 5. Creación de Universidades privadas y centros universitarios privados.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. No se modifica</p> <p>3. La realización de actos y negocios jurídicos que modifiquen la personalidad jurídica o la estructura de la Universidad privada, o que impliquen la transmisión o cesión, intervivos, total o parcial, a título oneroso o gratuito, de la titularidad directa o indirecta que las personas físicas o jurídicas ostenten sobre las Universidades privadas o centros universitarios privados adscritos a Universidades públicas, deberá ser previamente comunicada a la Comunidad Autónoma. Ésta, en el plazo que determine con carácter general, podrá denegar su conformidad. La denegación deberá fundarse en el incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo o en la insuficiencia de garantías para el cumplimiento de los compromisos adquiridos al solicitarse el reconocimiento de la Universidad, o en el convenio de adscripción del centro privado a una Universidad pública. En los supuestos de cambio de titularidad, el nuevo titular quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del titular anterior. <u>La infracción de lo previsto en los párrafos anteriores supondrá una modificación de las condiciones esenciales del reconocimiento o de la aprobación de la adscripción y podrá ser causa de su revocación.</u></p> <p>4. Los centros universitarios privados deberán estar integrados en una Universidad privada, como centros propios de la misma, o adscritos a una pública <u>o privada.</u></p>
<p><b>Artículo 6. Régimen jurídico.</b></p> <p>1. 1. Las Universidades se registrarán por la presente Ley y por las normas que dicten el</p>	<p><b>Artículo 6. Régimen jurídico.</b></p> <p>1. No se modifica.</p>

<p>Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias.</p> <p>2. Las Universidades públicas se registrarán, además, por la Ley de su creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y, previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Si existieran reparos de legalidad, las Universidades deberán subsanarlos, de acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos, y someterlos de nuevo a la aprobación por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.</p> <p>En defecto de plazo distinto establecido por la Comunidad Autónoma, el proyecto de Estatutos se entenderá aprobado si transcurridos tres meses desde la fecha de su presentación al citado Consejo de Gobierno no hubiera recaído resolución expresa. Una vez aprobados, los Estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, serán publicados en el "Boletín Oficial del Estado".</p> <p>3. Las Universidades públicas se organizarán de forma que, en los términos de la presente Ley, en sus órganos de gobierno y de representación quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.</p> <p>4. En las Universidades públicas, las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario, agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p> <p>5. Las Universidades privadas se registrarán por las normas a que se refiere el apartado 1 anterior, por la Ley de su reconocimiento y por sus propias normas de organización y funcionamiento. Éstas incluirán las previsiones derivadas de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, y el carácter propio de la Universidad, si procede. A las Universidades privadas también les serán de aplicación las normas correspondientes a la clase de personalidad jurídica adoptada.</p> <p>Las normas de organización y funcionamiento de las Universidades privadas serán elaboradas y aprobadas por ellas mismas, con sujeción, en todo caso, a los principios constitucionales y con garantía efectiva del principio de libertad académica manifestada en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. El régimen de su aprobación será el previsto en el apartado 2 anterior.</p> <p>Las Universidades privadas se organizarán de forma que quede asegurada, mediante la participación adecuada de la comunidad universitaria, la vigencia efectiva en las mismas de los principios y libertades a que hace referencia el párrafo anterior.</p>	<p>2. Las Universidades públicas se registrarán, además, por la Ley de su creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y, previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Si existieran reparos de legalidad, las Universidades deberán subsanarlos, de acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos, y someterlos de nuevo a la aprobación por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.</p> <p>En defecto de plazo distinto establecido por la Comunidad Autónoma, el proyecto de Estatutos se entenderá aprobado si transcurridos tres meses desde la fecha de su presentación al citado Consejo de Gobierno no hubiera recaído resolución expresa. Una vez aprobados, los Estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, serán publicados en el "Boletín Oficial del Estado".</p> <p><u>Los poderes públicos y las universidades a través de sus estatutos, establecerán mecanismos para que en los procesos de acogida de los diferentes miembros de la comunidad universitaria se favorezca el conocimiento suficiente de las lenguas cooficiales.</u></p> <p>3. No se modifica</p> <p>4. No se modifica</p> <p>5. No se modifica</p>
<b>TÍTULO II. De la estructura de las Universidades</b> <b>CAPÍTULO I. De las Universidades públicas</b>	
<p><b>Artículo 7. Centros y estructuras.</b></p> <p><del>Las Universidades públicas estarán integradas por Facultades, Escuelas <del>Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas,</del> Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y por aquellos otros centros o estructuras <del>que organicen enseñanzas en modalidad no presencial.</del></del></p>	<p><b>Artículo 7. Centros y estructuras.</b></p> <p>Las universidades públicas estarán integradas por <u>Escuelas,</u> Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y por aquellos otros centros o estructuras <u>necesarios para el desempeño de sus funciones.</u></p>

<p><del>2- Las Universidades podrán crear otros centros o estructuras, cuyas actividades de desarrollo de sus fines institucionales no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales.</del></p>	
<p><b>Artículo 8. Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas.</b></p> <p>1. Las Facultades, Escuelas <del>Técnicas o Politécnicas Superiores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas</del>, son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención <del>de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de aquellas otras funciones que determinen los Estatutos.</del></p> <p>2. La creación, modificación y supresión de los centros a que se refiere el apartado 1 de este artículo, así como la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien a <del>propuesta del Consejo Social</del> o bien por propia iniciativa <del>con el acuerdo del referido Consejo, en todo caso previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.</del></p> <p>De lo señalado en el párrafo anterior será informado <del>el Consejo de Coordinación Universitaria.</del></p>	<p><b>Artículo 8. Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas.</b></p> <p>1. Las <u>escuelas y facultades</u> son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención <u>de títulos de grado</u>. Podrán impartir también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así como llevar a cabo aquellas otras funciones que determine la universidad.</p> <p>2. La creación, modificación y supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, <u>con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad</u>, bien por iniciativa de la universidad <u>mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.</u></p> <p>3. De lo señalado en el apartado anterior será informada <u>la Conferencia General de Política Universitaria.</u></p>
<p><b>Artículo 9. Departamentos.</b></p> <p>1. Los Departamentos son <del>los órganos</del> encargados de coordinar las enseñanzas de una o varias <u>áreas</u> de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas por los Estatutos.</p> <p>2. La creación, modificación y supresión de Departamentos corresponde a la Universidad conforme a sus Estatutos, <del>y de acuerdo con las normas básicas que apruebe el Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.</del></p>	<p><b>Artículo 9. Departamentos.</b></p> <p>1. Los departamentos son <u>las unidades de docencia e investigación</u> encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios <u>ámbitos</u> del conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas por los estatutos.</p> <p>2. La creación, modificación y supresión de departamentos corresponde a la universidad, conforme a sus estatutos.</p>
<p><b>Artículo 10. Institutos Universitarios de Investigación.</b></p> <p>1. Los Institutos Universitarios de Investigación son centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística. Podrán organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de postgrado según los procedimientos previstos en los Estatutos, y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias. Los Institutos Universitarios de Investigación se regirán por la presente Ley, por los Estatutos, por el convenio de creación o de adscripción, en su caso, y por sus propias normas.</p> <p>2. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán ser constituidos por una o más Universidades, o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas mediante convenios u otras formas de cooperación, de conformidad con los Estatutos.</p> <p>3. Para la creación y supresión de los Institutos Universitarios de Investigación se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8.</p> <p>4. Mediante convenio, podrán adscribirse a Universidades públicas, como Institutos Universitarios de Investigación, instituciones o centros de investigación de carácter</p>	<p><b>Artículo 10. Institutos Universitarios de Investigación.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán ser constituidos por una o más Universidades, o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas mediante convenios u otras formas de cooperación, de conformidad con los estatutos. <u>Asimismo, las Universidades, conjuntamente con los centros públicos de investigación o con los centros del Sistema Nacional de Salud, podrán constituir Institutos Mixtos de Investigación. A estos efectos, y de acuerdo con lo que establezcan los estatutos de las universidades, el personal docente e investigador podrá ser adscrito a los citados Institutos Mixtos de Investigación.</u></p> <p>3. No se modifica</p> <p>4. Mediante convenio, podrán adscribirse a universidades públicas, como institutos universitarios de investigación, instituciones o centros de investigación de carácter</p>

<p>público o privado. La aprobación de la adscripción o, en su caso, desadscripción se hará por la Comunidad Autónoma, bien a <del>propuesta del Consejo Social</del> o bien por propia iniciativa con el <del>acuerdo del referido Consejo</del> y, en todo caso, <del>previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad</del>.</p> <p>De lo señalado en el párrafo anterior será informado <del>el Consejo de Coordinación Universitaria</del>.</p>	<p>público o privado. La aprobación de la adscripción o, en su caso, desadscripción corresponde a la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con <u>acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad y previo informe favorable del Consejo Social</u>, o bien por iniciativa de la universidad mediante <u>propuesta del Consejo de Gobierno, con informe previo favorable del Consejo Social</u></p> <p>De lo señalado en el párrafo anterior será informada <u>la Conferencia General de Política Universitaria</u>.</p>
<p><b>Artículo 11. Centros de enseñanza universitaria adscritos a Universidades públicas.</b></p> <p>1. La adscripción mediante convenio a una Universidad pública de centros docentes de titularidad pública o privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, requerirá la aprobación de la Comunidad Autónoma, a <del>propuesta del Consejo Social, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad</del>.</p> <p>El centro adscrito deberá estar establecido en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.</p> <p>De lo señalado en el párrafo anterior será informado <del>el Consejo de Coordinación Universitaria</del>.</p> <p>2. Los centros adscritos a una Universidad <del>pública</del> se regirán por lo dispuesto en esta Ley, por las normas dictadas por el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, por el convenio de adscripción y por sus propias normas de organización y funcionamiento.</p> <p>3. El comienzo de las actividades de los centros adscritos será autorizado por la Comunidad Autónoma.</p>	<p><b>Artículo 11. Centros de enseñanza universitaria adscritos a universidades.</b></p> <p>1. La adscripción mediante convenio a una universidad pública de centros docentes de titularidad pública o privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, requerirá la aprobación de la Comunidad Autónoma, a <u>propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe favorable de su Consejo Social. La adscripción mediante convenio a una universidad privada de centros docentes de titularidad privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá la aprobación de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la universidad.</u></p> <p>2. Los centros adscritos deberán estar establecidos en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma, <u>o contar, asimismo, con la aprobación de aquélla en la que estuvieran ubicados.</u></p> <p>3. Los centros adscritos a una universidad se regirán por lo dispuesto en esta Ley, por las normas dictadas por el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, por el convenio de adscripción y por sus propias normas de organización y funcionamiento. El comienzo de las actividades de los centros adscritos será autorizado por la Comunidad Autónoma.</p> <p>4. <u>El Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.3, establecerá los requisitos básicos que deberán cumplir los centros adscritos.</u></p> <p>5. De lo señalado en los apartados 1 y 2 será informada la <u>Conferencia General de Política Universitaria</u>.</p>
<b>CAPÍTULO II. De las Universidades privadas</b>	
<p><b>Artículo 12. Estructura y centros.</b></p> <p>1. La estructura de las Universidades privadas se ajustará a lo establecido en el capítulo I de este Título, entendiéndose referidas a las normas de organización y funcionamiento de las Universidades privadas las menciones que en los mismos se efectúan a los Estatutos de las Universidades públicas.</p> <p>2. El reconocimiento de la creación, modificación y supresión en las Universidades privadas de los centros a que se refiere el apartado 1 del artículo 8, así como de la implantación y supresión en las mismas de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se efectuará a propuesta de la Universidad, en los términos previstos en el capítulo I de este Título.</p>	<p>No se modifica</p>
<b>TÍTULO III. Del Gobierno y representación de las Universidades</b>	
<b>CAPÍTULO I. De las Universidades públicas</b>	
<p><b>Artículo 13. Órganos de gobierno y representación de las Universidades públicas.</b> Los Estatutos de las Universidades públicas establecerán, como mínimo, los siguientes</p>	<p><b>Artículo 13. Órganos de gobierno y representación de las Universidades públicas.</b> Los Estatutos de las universidades públicas establecerán, al menos, los siguientes</p>

<p>órganos:</p> <p>a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, <del>Junta Consultiva</del>, Juntas de Facultad, de Escuela <del>Técnica o Politécnica Superior y de Escuela Universitaria o Escuela Universitaria Politécnica</del>, y Consejos de Departamento.</p> <p>b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario general, Gerente, Decanos de Facultades, Directores de Escuelas <del>Técnicas o Politécnicas Superiores, de Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas</del>, de Departamentos y de Institutos Universitarios de Investigación.</p> <p>La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria en el Claustro Universitario, en las Juntas de Facultad o Escuela, y en los Consejos de Departamento, se realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Los Estatutos establecerán las normas electorales aplicables.</p>	<p>órganos:</p> <p>a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de <u>Escuela y Facultad</u> y Consejos de Departamento.</p> <p>b) Unipersonales: Rector <u>o Rectora</u>, Vicerrectores <u>o vicerrectoras</u>, Secretario <u>o Secretaria</u> General, Gerente, Decanos <u>o Decanas</u> de Facultades, Directores <u>o Directoras</u> de Escuelas, de Departamentos y de Institutos Universitarios de Investigación.</p> <p>La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria en el Claustro Universitario, en las Juntas de Facultad o Escuela, y en los Consejos de Departamento, se realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, <u>en cada uno de ellos</u>.</p> <p>Los Estatutos establecerán las normas electorales aplicables, <u>las cuales deberán propiciar en los Órganos Colegiados la presencia equilibrada entre mujeres y hombres</u>.</p>
<p><b>Artículo 14. Consejo Social.</b></p> <p>1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad.</p> <p>2. Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios; promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria, a cuyo fin podrá disponer de la oportuna información de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.</p> <p>Asimismo, le corresponde la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. Además, con carácter previo al trámite de rendición de cuentas a que se refieren los artículos 81 y 84, le corresponde aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las de las entidades que de ella puedan depender y sin perjuicio de la legislación mercantil u otra a las que dichas entidades puedan estar sometidas en función de su personalidad jurídica.</p> <p>3. La Ley de la Comunidad Autónoma regulará la composición y funciones del Consejo Social y la designación de sus miembros de entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, que no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria. Serán, no obstante, miembros del Consejo Social, el Rector, el Secretario general y el Gerente, así como un profesor, un estudiante y un representante del personal de administración y servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros. El Presidente del Consejo Social será nombrado por la Comunidad Autónoma.</p> <p>4. El Consejo Social, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, dispondrá de una organización de apoyo y de recursos suficientes.</p>	<p><b>Artículo 14. Consejo Social.</b></p> <p>1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, <u>y debe ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad</u>.</p> <p>2. Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios y promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad. <u>A tal fin, aprobará un plan anual de actuaciones destinado a</u> promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria. Los consejos sociales podrán disponer de la oportuna información <u>y asesoramiento de los órganos de evaluación de las Comunidades Autónomas</u> y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.</p> <p>Asimismo, le corresponde la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. Además, con carácter previo al trámite de rendición de cuentas a que se refieren los artículos 81 y 84, le corresponde aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las de las entidades que de ella puedan depender y sin perjuicio de la legislación mercantil u otra a las que dichas entidades puedan estar sometidas en función de su personalidad jurídica.</p> <p>3. La Ley de la Comunidad Autónoma regulará la composición y funciones del Consejo Social y la designación de sus miembros de entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, que no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria. Serán, no obstante, miembros del Consejo Social, el Rector, el Secretario General y el Gerente, así como un profesor, un estudiante y un representante del personal de administración y servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros. El Presidente del Consejo Social será nombrado por la Comunidad Autónoma <u>en la forma que determine la Ley respectiva</u>.</p> <p>4. No se modifica</p>
<p><b>Artículo 15. Consejo de Gobierno.</b></p> <p>1. El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad. Establece las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los presupuestos, y</p>	<p><b>Artículo 15. Consejo de Gobierno.</b></p> <p>1. No se modifica</p>

<p>ejerce las funciones previstas en esta Ley y las que establezcan los Estatutos.</p> <p>2. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y un máximo de cincuenta miembros <del>de la propia comunidad universitaria. De éstos, el 30 por ciento será designado por el Rector, el 40 por ciento elegido por el Claustro, de entre sus miembros, reflejando la composición de los distintos sectores del mismo, y el 30 por ciento restante elegido o designado de entre Decanos de Facultad, Directores de Escuela y Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación, según establezcan los Estatutos.</del> Además, <del>serán</del> miembros del Consejo de Gobierno, tres miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la propia comunidad universitaria.</p>	<p>2. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y un máximo de 50 miembros de la comunidad universitaria. <u>Del mismo formarán parte los Vicerrectores, una representación de la comunidad universitaria, reflejando la composición de los distintos sectores en el Claustro, y una representación de Decanos y Directores, según establezcan los Estatutos.</u> Además, <u>cuando así lo determinen los Estatutos, podrán</u> ser miembros del Consejo de Gobierno hasta un máximo de tres miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la propia comunidad universitaria.</p>
<p><b>Artículo 16. Claustro Universitario.</b></p> <p>1. El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Estará formado por el Rector, que lo presidirá, el Secretario general y el Gerente, y un máximo de trescientos miembros. Le corresponde la elaboración de los Estatutos y las demás funciones que le atribuye la presente Ley.</p> <p>2. El Claustro, con carácter extraordinario, podrá convocar elecciones a Rector a iniciativa de un tercio de sus miembros y con la aprobación de dos tercios. La aprobación de la iniciativa llevará consigo la disolución del Claustro y el cese del Rector que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Rector. El procedimiento será establecido por los Estatutos. Si la iniciativa no fuese aprobada, ninguno de sus signatarios podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde <del>la votación de la misma.</del></p> <p>3. Los Estatutos regularán la composición y duración del mandato del Claustro, en el que estarán representados los distintos sectores de la comunidad universitaria. Al menos, el cincuenta y uno por ciento de sus miembros serán funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios.</p> <p>4. Las elecciones de representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno se llevarán a cabo por y entre los propios miembros de cada uno de los sectores elegibles.</p>	<p><b>Artículo 16. Claustro Universitario.</b></p> <p>1. El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Estará formado por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y un máximo de 300 miembros. Le corresponde la elaboración de los Estatutos, <u>la elección del Rector, en su caso,</u> y las demás funciones que le atribuye la presente Ley.</p> <p>2. <u>Cualquiera que fuese la forma de elección,</u> el Claustro podrá convocar, con carácter extraordinario, elecciones a Rector a iniciativa de un tercio de sus componentes y con la aprobación de dos tercios. La aprobación de la iniciativa llevará consigo la disolución del Claustro y el cese del Rector que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Rector. El procedimiento será establecido por los estatutos. Si la iniciativa no fuese aprobada, ninguno de sus signatarios podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde <u>su votación.</u></p> <p>3. No se modifica</p> <p>4. No se modifica</p>
<p><del><b>Artículo 17. Junta Consultiva.</b></del></p> <p><del>1- La Junta Consultiva es el órgano ordinario de asesoramiento del Rector y del Consejo de Gobierno en materia académica, y está facultada para formular propuestas a los mismos.</del></p> <p><del>2- La Junta Consultiva, presidida por el Rector, estará constituida por el Secretario general y un máximo de cuarenta miembros designados por el Consejo de Gobierno entre profesores e investigadores de reconocido prestigio, con méritos docentes e investigadores acreditados por las correspondientes evaluaciones positivas conforme a la normativa vigente. Los Estatutos regularán su funcionamiento.</del></p>	<p><u>El artículo 17 queda sin contenido.</u></p>
<p><b>Artículo 18. Junta de Facultad o Escuela.</b></p> <p>La Junta de Facultad o Escuela, presidida por el Decano o Director, es el órgano de gobierno de ésta. La composición y el procedimiento de elección de sus miembros serán determinados por los Estatutos. Al menos, el cincuenta y uno por ciento de sus miembros serán funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Artículo 19. Consejo de Departamento.</b></p> <p>El Consejo de Departamento, presidido por su Director, es el órgano de gobierno del mismo. Estará integrado por los doctores miembros del Departamento, así como por una representación del resto de personal docente e investigador no doctor en la forma que</p>	<p>No se modifica</p>

<p>determinen los Estatutos. En todo caso, los Estatutos garantizarán la presencia de una representación de los estudiantes y del personal de administración y servicios.</p>	
<p><b>Artículo 20. Rector.</b></p> <p>1. El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos. Le corresponden cuantas competencias no sean expresamente atribuidas a otros órganos.</p> <p>2. El Rector será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal <del>libre y secreto</del>, entre funcionarios del cuerpo de Catedráticos de Universidad, en activo, que presten servicios en <del>esta</del>. Será nombrado por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. Los Estatutos regularán el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de su sustitución en caso de vacante, ausencia o enfermedad.</p> <p>3. El voto <del>para la elección del Rector</del> será ponderado, por sectores de la comunidad universitaria: <del>profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e investigador, estudiantes, y personal de administración y servicios. En todo caso, el voto conjunto de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios tendrá el valor de, al menos, el cincuenta y uno por ciento del total del voto a candidaturas válidamente emitido por la comunidad universitaria.</del></p> <p>En cada proceso electoral, la comisión electoral o el órgano que estatutariamente se establezca, determinará, tras el escrutinio de los votos, los coeficientes de ponderación que corresponderá aplicar al voto a candidaturas válidamente emitido en cada sector, al efecto de darle su correspondiente valor en atención a los porcentajes que se hayan fijado en esos mismos Estatutos, respetando siempre el mínimo establecido en el párrafo anterior.</p> <p>Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez hechas y aplicadas las ponderaciones contempladas en este apartado y concretadas por los Estatutos. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos más apoyados en la primera votación, teniendo en cuenta las citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones.</p> <p>En el supuesto de una sola candidatura únicamente se celebrará la primera vuelta.</p> <p><del>4. El Rector, para el desarrollo de las competencias que le atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido por un Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrectores, el Secretario general y el Gerente.</del></p>	<p><b>Artículo 20. Rector.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. El Rector será elegido <u>por el Claustro, o por</u> la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, <u>según indiquen los estatutos de cada Universidad</u>, entre funcionarios en activo del cuerpo de Catedráticos de Universidad que presten servicios en <u>ella</u>. Los Estatutos regularán <u>también</u> el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de su sustitución en caso de vacante, ausencia o enfermedad.</p> <p><u>En el caso de que la elección del Rector corresponda al Claustro, para ser proclamado Rector será necesario que un candidato obtenga en primera votación más de la mitad de los votos a candidaturas emitidos válidamente. Si ningún candidato la alcanza, se procederá a una segunda votación a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos con mayor número de votos en la primera votación, y será elegido Rector el candidato que obtenga más votos.</u></p> <p><u>El Rector o la Rectora</u> será nombrado por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.</p> <p>3. <u>En el caso que los Estatutos establezcan la elección de Rector por la comunidad universitaria</u>, el voto será ponderado, por <u>los distintos</u> sectores de la comunidad universitaria. En todo caso, <u>la mayoría corresponderá a los profesores doctores con vinculación permanente a la universidad.</u></p> <p>En cada proceso electoral, la comisión electoral o el órgano que estatutariamente se establezca, determinará, tras el escrutinio de los votos, los coeficientes de ponderación que corresponderá aplicar al voto a candidaturas válidamente emitido en cada sector, al efecto de darle su correspondiente valor en atención a los porcentajes que se hayan fijado en esos mismos Estatutos, respetando siempre el mínimo establecido en el párrafo anterior.</p> <p>Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez hechas y aplicadas las ponderaciones contempladas en este apartado y concretadas por los Estatutos. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos más apoyados en la primera votación, teniendo en cuenta las citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones.</p> <p>En el supuesto de una sola candidatura únicamente se celebrará la primera vuelta.</p> <p>4. <u>Queda sin contenido.</u></p>
<p><b>Artículo 21. Vicerrectores.</b></p>	<p>No se modifica</p>

<p>El Rector podrá nombrar Vicerrectores entre los profesores doctores que presten servicios en la Universidad.</p>	
<p><b>Artículo 22. Secretario General.</b> El Secretario General, que será nombrado por el Rector entre funcionarios públicos <del>del grupo A</del> que presten servicios en la Universidad, lo será también del Consejo de Gobierno <del>y de la Junta Consultiva.</del></p>	<p><b>Artículo 22. Secretario General.</b> El Secretario General, <u>o la Secretaria General</u>, que será nombrado por el Rector entre funcionarios públicos que presten servicios en la universidad, <u>pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente</u>, lo será también del Consejo de Gobierno.</p>
<p><b>Artículo 23. Gerente.</b> Al Gerente le corresponde la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad. Será <del>propuesto</del> por el Rector <del>y</del> nombrado por éste de acuerdo con el Consejo Social. El Gerente no podrá ejercer funciones docentes.</p>	<p><b>Artículo 23. Gerente.</b> Al <u>o a la</u> Gerente le corresponde la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad. Será <u>nombrado</u> por el Rector, de acuerdo con el Consejo Social, <u>atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia</u>. El Gerente no podrá ejercer funciones docentes.</p>
<p><b>Artículo 24. Decanos de Facultad y Directores de Escuela.</b> Los Decanos de Facultad y Directores de Escuela ostentan la representación de sus centros y ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria de <del>los mismos</del>. Serán elegidos, en los términos establecidos por los Estatutos, entre profesores <del>doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios adscritos al respectivo centro. En su defecto, en las Escuelas Universitarias y en las Escuelas Universitarias Politécnicas, el Director será elegido entre funcionarios de cuerpos docentes universitarios no doctores o profesores contratados doctores.</del></p>	<p><b>Artículo 24. Decanos de Facultad y Directores de Escuela.</b> Los Decanos <u>y Decanas</u> de Facultad y Directores <u>y Directoras</u> de Escuela ostentan la representación de sus centros y ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria de <u>éstos</u>. Serán elegidos, en los términos establecidos por los estatutos, entre profesores <u>y profesoras con vinculación permanente a la universidad</u>.</p>
<p><b>Artículo 25. Directores de Departamento.</b> Los Directores de Departamento ostentan la representación de éste y ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria del <del>mismo</del>. Serán elegidos por el Consejo de Departamentos en los términos establecidos por los Estatutos, entre profesores <del>doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios miembros del mismo. En su defecto, en los Departamentos constituidos sobre las áreas de conocimiento a que se refiere el apartado 3 de los artículos 58 y 59, podrán ser Directores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios no doctores o profesores contratados doctores.</del></p>	<p><b>Artículo 25. Directores de Departamento.</b> Los Directores <u>y Directoras</u> de Departamento ostentan la representación de éste y ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria del <u>Departamento</u>. Serán elegidos por el Consejo de Departamentos en los términos establecidos por los estatutos, entre profesores <u>y profesoras doctores con vinculación permanente a la universidad</u>.</p>
<p><b>Artículo 26. Directores de Institutos Universitarios de Investigación.</b> Los Directores de Institutos Universitarios de Investigación ostentan la representación de éstos y ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria de los mismos. Serán designados entre doctores, en la forma que establezcan los Estatutos. En los Institutos Universitarios de Investigación adscritos a Universidades públicas se estará a lo dispuesto en el convenio de adscripción.</p>	<p>No se modifica</p>
<b>CAPÍTULO II. De las Universidades privadas</b>	
<p><b>Artículo 27. Órganos de gobierno y representación de las Universidades privadas.</b> 1. Las normas de organización y funcionamiento de las Universidades privadas establecerán sus órganos de gobierno y representación, así como los procedimientos para su designación y remoción.  2. Los órganos unipersonales de gobierno de las Universidades privadas tendrán idéntica</p>	<p><b>Artículo 27. Órganos de gobierno y representación de las Universidades privadas.</b> 1. Las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas establecerán sus órganos de gobierno y representación, así como los procedimientos para su designación y remoción, <u>asegurando en dichos órganos, mediante una participación adecuada, la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria de forma que propicie la presencia equilibrada entre mujeres y hombres. En todo caso, las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas deberán garantizar que las decisiones de naturaleza estrictamente académica se adopten por órganos en los que el personal docente o investigador tenga una representación mayoritaria. Igualmente, deberán garantizar que el personal docente o investigador sea oído en el nombramiento del Rector.</u>  2. No se modifica</p>

<p>denominación a la establecida para los de las Universidades públicas y sus titulares deberán estar en posesión del título de Doctor cuando así se exija para los mismos órganos de aquéllas.</p>	
<p><b>TÍTULO IV. Del Consejo de la coordinación universitaria</b></p>	
	<p><b>Artículo 27 bis. Conferencia General de Política Universitaria</b></p> <p>1. <u>La Conferencia General de Política Universitaria es el órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria al que le corresponden las funciones de:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <u>Establecer y valorar las líneas generales de política universitaria, su articulación en el espacio europeo de educación superior y su interrelación con las políticas de investigación científica y tecnológica.</u></li> <li>b) <u>Planificación, informe, consulta y asesoramiento sobre la programación general y plurianual de la enseñanza universitaria, que comprende los recursos humanos, materiales y financieros precisos para la prestación del servicio público universitario.</u></li> <li>c) <u>Aprobar los criterios de coordinación sobre las actividades de evaluación, certificación y acreditación reguladas en el título V.</u></li> <li>d) <u>Proponer y valorar medidas para impulsar la colaboración entre universidad y empresa.</u></li> <li>e) <u>Coordinar la elaboración y seguimiento de informes sobre la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la universidad.</u></li> </ol> <p><u>En el desarrollo de sus funciones, podrá proponer que se soliciten informes o estudios del Consejo Económico y Social.</u></p> <p>2. <u>Bianualmente, la Conferencia General de Política Universitaria elaborará un informe sobre la situación del sistema universitario y su financiación, y formulará propuestas que permitan mejorar su calidad y su eficiencia, asegurar la suficiencia financiera del mismo, así como garantizar a los ciudadanos las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.</u></p> <p>3. <u>Bajo la presidencia del titular del departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en materia de universidades, estará compuesta por los responsables de la enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y por cinco miembros designados por el presidente de la Conferencia.</u></p> <p>4. <u>La organización y el funcionamiento de la Conferencia se establecerán en su reglamento interno.</u></p>
<p><b>Artículo 28. Naturaleza y funciones.</b>  <del>El Consejo de Coordinación Universitaria es el máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario. Le corresponden las funciones de consulta sobre política universitaria, y las de coordinación, programación, informe, asesoramiento y propuesta en las materias relativas al sistema universitario, así como las que determinen la Ley y sus disposiciones de desarrollo.</del></p>	<p><b>Artículo 28. Consejo de Universidades.</b>  <u>El Consejo de Universidades es el órgano de cooperación y coordinación académica, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria. Le corresponden las siguientes funciones, que desarrolla con plena autonomía funcional:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <u>Servir de cauce para la colaboración, la cooperación y la coordinación en el ámbito académico.</u></li> <li>b) <u>Informar las disposiciones legales y reglamentarias que afectan al sistema universitario en su conjunto.</u></li> <li>c) <u>Prestar el asesoramiento que en materia universitaria sea requerido por el Ministerio de Educación y Ciencia. La Conferencia General de Política Universitaria o, en su caso, de las Comunidades Autónomas.</u></li> <li>d) <u>Formular propuestas al Gobierno, en materias relativas al sistema universitario y a la Conferencia General de Política Universitaria.</u></li> <li>e) <u>La verificación de la adecuación de los planes de estudios a las directrices y</u></li> </ol>

	<p><u>condiciones establecidas por el Gobierno para los títulos oficiales.</u></p> <p>f) <u>Desarrollar cuantas otras tareas le encomienden las leyes y sus disposiciones de desarrollo.</u></p>
<p><b>Artículo 29. Composición.</b>  El Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del>, cuya presidencia ostentará el <del>Ministro de Educación, Cultura y Deporte</del>, estará compuesto por los siguientes vocales:</p> <p>a) <del>Los responsables de la enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.</del></p> <p>b) Los Rectores de las Universidades.</p> <p>c) <del>Veintiún miembros, nombrados por un periodo de cuatro años, entre personalidades de la vida académica, científica, cultural, profesional, económica y social, y designados siete por el Congreso de los Diputados, siete por el Senado y siete por el Gobierno. Entre los vocales de designación del Gobierno podrán figurar también miembros de la Administración General del Estado.</del></p>	<p><b>Artículo 29. Composición <u>del Consejo de Universidades.</u></b>  El Consejo de <u>Universidades</u>, será presidido por el <u>titular del Ministerio competente en materia de universidades</u>, y estará compuesto por los siguientes vocales:</p> <p>a) Los Rectores de las Universidades.</p> <p>b) <u>Cinco</u> miembros, <u>designados por el Presidente del Consejo.</u></p>
<p><b>Artículo 30. Organización.</b></p> <p>1. El Consejo de Coordinación Universitaria funcionará en Pleno y en Comisiones.</p> <p>2. El Pleno, presidido por el Presidente del Consejo de Coordinación Universitaria o miembro <del>del mismo</del> en quien delegue, tendrá las siguientes funciones: elaborar el Reglamento del Consejo y elevarlo al Ministro <del>de Educación, Cultura y Deporte</del> para su aprobación por el Gobierno; proponer, en su caso, <del>las</del> modificaciones <del>a dicho</del> <u>Reglamento</u>; elaborar la memoria anual del Consejo, y aquellas otras que se determinen en su Reglamento.</p> <p><del>3. Las Comisiones, presididas por el Presidente del Consejo de Coordinación Universitaria o persona en quien delegue, serán:</del></p> <p>a) <del>La Comisión de Coordinación, que estará compuesta por los vocales mencionados en la letra a) del artículo anterior y por aquellos otros vocales mencionados en la letra c) del mismo artículo que el Presidente designe. A esta Comisión, que dará cuenta periódicamente al Pleno de sus acuerdos y decisiones, le corresponden las funciones que se determinen en el citado Reglamento y, en todo caso, las que la presente Ley atribuye al Consejo de Coordinación Universitaria en relación con las competencias reservadas al Estado y a las Comunidades Autónomas.</del></p> <p>b) <del>La Comisión Académica, que estará compuesta por los vocales mencionados en la letra b) del artículo anterior y por aquellos otros vocales mencionados en la letra e) que el Presidente designe. A esta Comisión, que dará cuenta periódicamente al Pleno de sus acuerdos y decisiones, le corresponden las funciones que se determinen en el citado Reglamento y, en todo caso, las que la presente Ley atribuye al Consejo de Coordinación Universitaria en relación con las facultades de las Universidades en uso de su autonomía.</del></p> <p>c) <del>La Comisión Mixta, que estará compuesta por miembros de los tres grupos a que se refiere el artículo anterior en igual proporción, elegidos por ellos, y en el número que determine el Reglamento del Consejo de Coordinación Universitaria. A esta Comisión le corresponde la función de elevar a las otras dos Comisiones propuesta de resolución o informe sobre aquellas materias en las que deban pronunciarse estas últimas. En caso de desacuerdo entre las mismas el pronunciamiento del Consejo de Coordinación Universitaria será el de la Comisión Mixta.</del></p>	<p><b>Artículo 30. Organización <u>del Consejo de Universidades.</u></b></p> <p>1. No se modifica.</p> <p>2. El Pleno, presidido por el Presidente del Consejo <u>de Universidades</u> o por el miembro en quien delegue, tendrá las siguientes funciones: elaborar el Reglamento del Consejo y elevarlo al Ministro <u>competente en materia de Universidades</u> para su aprobación por el Gobierno; proponer, en su caso, <u>sus</u> modificaciones; <u>informar los criterios de coordinación sobre las actividades de evaluación, certificación y acreditación reguladas en el título V</u>; elaborar la memoria anual del Consejo y aquellas otras que se determinen en su reglamento.</p>

<p>4. <del>El Reglamento del Consejo de Coordinación Universitaria determinará, de acuerdo con lo establecido en los apanados anteriores, el número, composición, forma de designación de los miembros y funciones de las Subcomisiones que hayan de constituirse.</del></p> <p>5. <del>Tanto las Comisiones como las Subcomisiones</del> podrán contar, para el desarrollo de su trabajo, con la colaboración de expertos en las materias que les son propias. La vinculación de estos expertos con el Consejo de Coordinación Universitaria podrá tener un carácter permanente o temporal. <del>El Reglamento regulará las relaciones de esos expertos con el Consejo de Coordinación Universitaria.</del></p> <p>6. En los asuntos que afecten en exclusiva al sistema universitario público, <del>en el Consejo de Coordinación Universitaria y sus órganos, no tendrán derecho a voto los Rectores de las Universidades privadas y de la Iglesia Católica.</del></p> <p>7. <del>La Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, bajo la dirección de un Secretario General, nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ejercerá las funciones que le atribuya el Reglamento.</del></p>	<p>3. <u>Los distintos órganos del Consejo de Universidades</u> podrán contar para el desarrollo de su trabajo con la colaboración de expertos <u>y expertas</u> en las materias que le son propias. La vinculación de estos expertos con el Consejo de Universidades podrá tener un carácter permanente o temporal <u>en la forma que disponga el reglamento.</u></p> <p>4. En los asuntos que afecten en exclusiva al sistema universitario público, <u>tendrán derecho a voto el Presidente del Consejo, los Rectores de las universidades públicas y los cinco miembros del Consejo designados por el Presidente.</u></p>
---	---

#### TÍTULO V. De la evaluación y acreditación

<p><b>Artículo 31. Garantía de la calidad.</b></p> <p>1. La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades españolas, en el ámbito nacional e internacional, es un fin esencial de la política universitaria y tiene como objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad.</li> <li>b) La transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las Universidades en el ámbito nacional e internacional.</li> <li>c) La mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las Universidades.</li> <li>d) La información a las Administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.</li> <li>e) La información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores.</li> </ol> <p>2. Los objetivos señalados en el apartado anterior se cumplirán mediante la evaluación, certificación y acreditación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, <del>a los efectos de su homologación por el Gobierno en los términos previstos en el artículo 35, así como de los títulos de Doctor de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.</del></li> <li>b) Las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las Universidades y centros de educación superior.</li> <li>c) Las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario.</li> <li>d) Las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de educación superior.</li> <li>e) Otras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por parte de las Administraciones públicas.</li> </ol> <p>3. Las funciones de evaluación, y las conducentes a la certificación y acreditación a que se refiere el apartado anterior, corresponden a la Agencia Nacional de Evaluación de</p>	<p><b>Artículo 31. Garantía de la calidad.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. Los objetivos señalados en el apartado anterior se cumplirán <u>mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía de calidad que faciliten</u> la evaluación, la certificación y la acreditación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.</li> <li>b) Las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las Universidades y centros de educación superior.</li> <li>c) Las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario.</li> <li>d) Las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de educación superior.</li> <li>e) Otras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por parte de las Administraciones públicas.</li> </ol> <p>3. Las funciones de evaluación, y las conducentes a la certificación y acreditación a que se refiere el apartado anterior, corresponden a la Agencia Nacional de Evaluación de</p>
--	---

<p>la Calidad y Acreditación y a los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determine, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las que desarrollen otras agencias de evaluación del Estado o de las Comunidades Autónomas.</p>	<p>la Calidad y Acreditación y a los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determine, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las que desarrollen otras agencias de evaluación del Estado o de las Comunidades Autónomas.</p> <p><u>A tal fin, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y los órganos de evaluación creados por ley de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con estándares internacionales de calidad, establecerán mecanismos de cooperación y reconocimiento mutuo. La Conferencia General de Política Universitaria informará y propondrá al Gobierno su regulación, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos señalados en los apartados anteriores.</u></p> <p>4. <u>El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para que las universidades sometan a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo de las enseñanzas oficiales, así como el procedimiento para su acreditación.</u></p>
<p><b>Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.</b>  <del>Mediante acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, el Gobierno autorizará la constitución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.</del></p>	<p><b>Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.</b></p> <p>1. <u>Se autoriza la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, a la que corresponden las funciones que le atribuye la presente Ley y la de elevar informes al ministerio competente en materia de universidades y al Consejo de Universidades sobre el desarrollo de los procesos de evaluación, certificación y acreditación en España, a cuyos efectos podrá solicitar y prestar colaboración a los órganos de evaluación que, en su caso, existan en las Comunidades Autónomas.</u></p> <p>2. <u>La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación desarrollará su actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y transparencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en el ámbito internacional.</u></p>
<p><b>TÍTULO VI. De las enseñanzas y títulos</b></p>	
<p><b>Artículo 33. De la función docente.</b></p> <p>1. Las enseñanzas para el ejercicio de profesiones que requieren conocimientos científicos, técnicos o artísticos, y la transmisión de la cultura son misiones esenciales de la Universidad.</p> <p>2. La docencia es un derecho y un deber de los profesores de las Universidades que ejercerán con libertad de cátedra, sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes y los derivados de la organización de las enseñanzas en sus Universidades.</p> <p>3. La actividad y la dedicación docente, así como la formación del personal docente de las Universidades, serán criterios relevantes, atendida su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Artículo 34. <del>Establecimiento de títulos universitarios y de las directrices generales de sus planes de estudios:</del></b></p> <p><del>1- Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como las directrices generales de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y homologación, serán establecidos por el Gobierno, bien por su propia iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, o a propuesta de este Consejo.</del></p> <p><del>2- Los títulos a que hace referencia el apartado anterior, que se integrarán en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales que apruebe el Gobierno, serán expedidos</del></p>	<p><b>Artículo 34. Títulos universitarios.</b></p> <p>1. <u>Las Universidades impartirán enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional y podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos.</u></p> <p>2. <u>Los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional deberán inscribirse en el Registro de universidades, centros y títulos, previsto en la disposición adicional vigésima. Podrán inscribirse otros títulos a efectos informativos. El Gobierno regulará el procedimiento y las condiciones para su inscripción.</u></p>

<p><del>en nombre del Rey por el Rector de la Universidad en la que se hubieren obtenido.</del></p> <p><del>3. Las Universidades podrán establecer enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas de formación a lo largo de toda la vida. Estos diplomas y títulos carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorgan a los mencionados en el apartado 1.-</del></p>	
<p><b>Artículo 35. Homologación de planes de estudios y de títulos.</b></p> <p><del>1. Con sujeción a las directrices generales establecidas, las Universidades elaborarán y aprobarán los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, correspondientes a enseñanzas que hayan sido implantadas por las Comunidades Autónomas.</del></p> <p><del>2. Con carácter previo a su remisión al Consejo de Coordinación Universitaria, las Universidades deberán poner los planes de estudios en conocimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente, a los efectos de la obtención del informe favorable relativo a la valoración económica del plan de estudios y a su adecuación a los requisitos a que se refiere el apartado 3 del artículo 4.</del></p> <p><del>3. Las Universidades, obtenido el informe de la Comunidad Autónoma, remitirán los planes de estudios al Consejo de Coordinación Universitaria a efectos de verificación de su ajuste a las directrices generales a que se refiere el apartado 1 y de la consecuente homologación de los mismos por dicho Consejo. Transcurridos seis meses desde la recepción por el Consejo de Coordinación Universitaria de los mencionados planes de estudios, y no habiéndose producido resolución al respecto, se entenderán homologados.</del></p> <p><del>4. El Gobierno, acreditada la homologación del plan de estudios y el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 2, homologará los correspondientes títulos, a los efectos de que la Comunidad Autónoma pueda autorizar la impartición de las enseñanzas y la Universidad proceder, en su momento, a la expedición de los títulos. Para homologar los títulos cuyas enseñanzas sean impartidas por centros universitarios privados será necesario que éstos estén integrados como centros propios en una Universidad privada o adscritos a una Universidad pública.</del></p> <p><del>5. A los efectos de este artículo, transcurrido el período de implantación de un plan de estudios, las Universidades deberán someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las enseñanzas. La Agencia dará cuenta de dicha evaluación al Consejo de Coordinación Universitaria y a la correspondiente Comunidad Autónoma, así como al Gobierno que, en su caso, adoptará las medidas que procedan de acuerdo con las previsiones del apartado siguiente.</del></p> <p><del>6. El Gobierno establecerá el procedimiento y los criterios para la suspensión o revocación de la homologación del título que, en su caso, pueda proceder por el incumplimiento de los requisitos o de las directrices generales a las que se ha hecho mención en los apartados 1 y 2, así como las consecuencias de la suspensión o revocación.</del></p>	<p><b>Artículo 35. Títulos oficiales.</b></p> <p>1. <u>El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la universidad.</u></p> <p>2. <u>Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deberán poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en la legislación de la misma y lo previsto en el artículo 8 de esta Ley, y obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno. El procedimiento deberá preservar la autonomía académica de las universidades.</u></p> <p>3. <u>Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios que otorgue el Consejo de Universidades, el Gobierno establecerá el carácter oficial del título y ordenará su inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos.</u></p> <p>4. <u>Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial de dicho título, el Rector ordenará publicar el plan de estudios en el "Boletín Oficial del Estado" y el diario oficial de la Comunidad Autónoma.</u></p>
	<p><b>Artículo 35 bis. Autorización para la implantación de las enseñanzas.</b>  <u>Las universidades deberán solicitar autorización de la Comunidad Autónoma para la implantación de las enseñanzas de acuerdo con lo que establezca la legislación autonómica correspondiente. Será requisito indispensable para otorgar dicha autorización que el Consejo de Universidades haya verificado que el plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.</u></p>
<p><b>Artículo 36. Convalidación o adaptación de estudios, equivalencia de títulos y</b></p>	<p><b>Artículo 36. Convalidación o adaptación de estudios, <u>validación de experiencia,</u></b></p>

<p><b>homologación de títulos extranjeros.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del> regulará los criterios generales a que habrán de ajustarse las Universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros, <del>a efectos de continuación de dichos estudios.</del></li> <li>2. El Gobierno, previo informe del Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del>, regulará:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a aquellos a que se refiere el artículo <del>34</del>.</li> <li>b) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Consejo de <u>Universidades</u> regulará los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.</li> <li>2. El Gobierno, previo informe del Consejo de <u>Universidades</u>, regulará:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a aquellos a que se refiere el artículo <u>35</u>.</li> <li>b) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.</li> <li>c) <u>Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.</u></li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Artículo 37. Estructura de las enseñanzas.</b></p> <p><del>Los estudios</del> universitarios se estructurarán, <del>como máximo</del>, en tres ciclos. La superación de <del>los estudios</del> dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del>, <del>y según la modalidad de enseñanza cíclica de que se trate, a la obtención de los títulos de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero y Doctor, y los que sustituyan a éstos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 88.</del></p>	<p><b>Artículo 37. Estructura de las enseñanzas oficiales.</b></p> <p><u>Las enseñanzas</u> universitarias se estructurarán en tres ciclos: <u>Grado, Máster y Doctorado</u>. La superación de <u>tales enseñanzas</u> dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de <u>Universidades</u>, a la obtención de los títulos <u>oficiales correspondientes</u>.</p>
<p><b>Artículo 38. Doctorado.</b></p> <p>Los estudios de doctorado, conducentes a la obtención del correspondiente título de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico, se organizarán y realizarán en la forma que determinen los Estatutos, de acuerdo con los criterios que para la obtención del título de doctor apruebe el Gobierno, previo informe del Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del>. En todo caso, estos criterios incluirán <del>el seguimiento y</del> superación de <del>materias de estudio</del> y la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo original de investigación.</p>	<p><b>Artículo 38. Doctorado.</b></p> <p>Los estudios de doctorado, conducentes a la obtención del correspondiente título de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico, se organizarán y realizarán en la forma que determinen los estatutos, de acuerdo con los criterios que para la obtención del título de Doctor apruebe el Gobierno, previo informe del Consejo de <u>Universidades</u>. En todo caso, estos criterios incluirán la superación de <u>un período de formación</u> y la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo original de investigación.</p>
<p><b>TÍTULO VII. De la investigación en la Universidad <u>y de la transferencia del conocimiento</u></b></p>	
<p><b>Artículo 39. La investigación, función de la Universidad.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La investigación, fundamento de la docencia, <del>medio para el progreso de la comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento</del>, constituye una función esencial de las Universidades.</li> <li>2. Se reconoce y garantiza la libertad de investigación en el ámbito universitario.</li> <li>3. La Universidad <del>asume</del>, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística, así como la formación de investigadores, y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada.</li> </ol>	<p><b>Artículo 39. La investigación <u>y la transferencia del conocimiento</u>. Funciones de la Universidad.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La investigación <u>científica</u> es fundamento <u>esencial</u> de la docencia y una <u>herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad</u>. Como tal, constituye una función esencial de la Universidad, <u>que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico</u>.</li> <li>2. No se modifica</li> <li>3. La Universidad <u>tiene</u>, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística <u>y la transferencia del conocimiento a la sociedad</u>, así como la formación de investigadores <u>e investigadoras</u>, y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada.</li> </ol>
<p><b>Artículo 40. La investigación, derecho y deber del profesorado universitario.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades, de acuerdo con los fines generales de la Universidad, y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.</li> <li>2. La investigación, sin perjuicio de la libre creación y organización por las Universidades de las estructuras que, para su desarrollo, las mismas determinen y de la libre</li> </ol>	<p><b>Artículo 40. La investigación, derecho y deber del profesorado universitario.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se modifica</li> <li>2. No se modifica</li> </ol>

<p>investigación individual se llevará a cabo, principalmente, en grupos de investigación, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.</p> <p>3. La actividad y dedicación investigadora y la contribución al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal docente e investigador de las Universidades será criterio relevante, <b>atendida</b> su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.</p> <p>4. Las Universidades fomentarán la movilidad de su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su formación y actividad investigadora, a través de la concesión de los oportunos permisos y licencias, en el marco de la legislación estatal y autonómica aplicable y de acuerdo con las previsiones estatutarias consignadas al efecto.</p>	<p>3. La actividad y dedicación investigadora y la contribución al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal docente e investigador de las Universidades será criterio relevante, <b>atendiendo</b> su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional. <u>La universidad facilitará la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación, e incentivará el desarrollo de una trayectoria profesional que permita una dedicación más intensa a la actividad docente o a la investigadora.</u></p> <p>4. No se modifica</p>
<p><b>Artículo 41. Fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica en la Universidad.</b></p> <p>1. La Universidad desarrollará una investigación de <b>excelencia</b> con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento, la innovación y la mejora de la calidad de vida de <b>los ciudadanos</b> y la competitividad de las empresas.</p> <p>2. El fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico corresponderá en el ámbito universitario a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio del desarrollo de programas propios de las Universidades y con la finalidad, entre otros objetivos, de asegurar:</p> <p>a) El fomento de la calidad y competitividad internacional de la investigación desarrollada por las Universidades españolas.</p> <p>b) El desarrollo de la investigación inter y multidisciplinar.</p> <p>c) La incorporación de científicos y grupos de científicos de especial relevancia dentro de las iniciativas de investigación por las Universidades.</p> <p>d) La movilidad de investigadores y grupos de investigación para la formación de equipos y centros de excelencia.</p> <p>e) La incorporación a las Universidades de personal técnico de apoyo a la investigación, atendiendo a las características de los distintos campos científicos.</p> <p>f) La coordinación de la investigación entre diversas Universidades y centros de investigación, así como la creación de centros o estructuras mixtas entre las Universidades y otros Organismos públicos y privados de investigación, y, en su caso, empresas.</p> <p>g) La vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la Universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas. Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de las</p>	<p><b>Artículo 41. Fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica en la Universidad.</b></p> <p>1. La Universidad desarrollará una investigación de <u>calidad y una gestión eficaz de la transferencia de conocimiento y la tecnología</u>, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento <u>y del desarrollo tecnológico</u>, la innovación y competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de <u>la ciudadanía</u> y <u>el progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, así como garantizar el fomento y la consecución de la igualdad.</u></p> <p>2. El fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico corresponderá en el ámbito universitario a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio del desarrollo de programas propios de las Universidades y con la finalidad, entre otros objetivos, de asegurar:</p> <p>a) El fomento de la calidad y competitividad internacional de la investigación desarrollada por las Universidades españolas.</p> <p>b) El desarrollo de la investigación inter y multidisciplinar.</p> <p>c) La incorporación de científicos y grupos de científicos de especial relevancia dentro de las iniciativas de investigación por las Universidades.</p> <p>d) La movilidad de investigadores y grupos de investigación para la formación de equipos y centros de excelencia.</p> <p>e) La incorporación a las Universidades de personal técnico de apoyo a la investigación, atendiendo a las características de los distintos campos científicos, <u>así como de personal de administración y servicios especializado en la gestión de la investigación y el conocimiento.</u></p> <p>f) La coordinación de la investigación entre diversas Universidades y centros de investigación, así como la creación de centros o estructuras mixtas entre las Universidades y otros Organismos públicos y privados de investigación, y, en su caso, empresas.</p> <p>g) La vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la Universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas, <u>prestando especial atención a la vinculación con el sistema productivo de su entorno.</u> Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria,</p>

<p>Universidades conforme al régimen previsto en el artículo 83.</p> <p>h) La generación de sistemas innovadores en la organización y gestión por las Universidades del fomento de su actividad investigadora, de la canalización de las iniciativas investigadoras de su profesorado, de la transferencia de los resultados de la investigación y de la captación de recursos para el desarrollo de ésta.</p>	<p>en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de las Universidades conforme al régimen previsto en el artículo 83.</p> <p>h) La generación de sistemas innovadores en la organización y gestión por las Universidades del fomento de su actividad investigadora, de la canalización de las iniciativas investigadoras de su profesorado, de la transferencia de los resultados de la investigación y de la captación de recursos para el desarrollo de ésta.</p> <p>3. <u>La transferencia del conocimiento es una función de las universidades. Éstas determinarán y establecerán los medios e instrumentos necesarios para facilitar la prestación de este servicio social por parte del personal docente e investigador. El ejercicio de dicha actividad dará derecho a la evaluación de sus resultados y al reconocimiento de los méritos alcanzados, como criterio relevante para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.</u>  <u>Las Universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83. A tal efecto, promoverán la movilidad del personal docente e investigador así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas.</u></p> <p>4. <u>Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen su carrera profesional fomentando una presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos sus ámbitos.</u></p>
<b>TÍTULO VIII. De los estudiantes</b>	
<p><b>Artículo 42. Acceso a la Universidad.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.</li> <li>2. Para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente.</li> <li>3. <del>Las Universidades, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria y teniendo en cuenta la programación de la oferta de plazas disponibles, establecerán los procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en centros de las mismas, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.</del></li> </ol> <p>El Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del> velará <del>para que las Universidades programen sus procedimientos de admisión de manera que los estudiantes puedan concurrir a Universidades diferentes.</del></p>	<p><b>Artículo 42. Acceso a la Universidad.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se modifica</li> <li>2. No se modifica</li> <li>3. <u>Corresponde al gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establecer el procedimiento para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba. La Conferencia General de Política Universitaria velará por que el procedimiento de admisión a los estudios universitarios de carácter oficial sea general, objetivo y universal, tenga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el espacio europeo de educación superior.</u></li> <li>4. <u>Para facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad.</u></li> </ol>
<p><b>Artículo 43. Oferta de plazas en las Universidades públicas.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las Comunidades Autónomas efectuarán la programación de la oferta de enseñanzas</li> </ol>	<p>No se modifica</p>

<p>de las Universidades públicas de su competencia y sus distintos centros, de acuerdo con ellas y conforme a los procedimientos que establezcan.</p> <p>La oferta de plazas se comunicará al Consejo de Coordinación Universitaria para su estudio y determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas, que será publicada en el "Boletín Oficial del Estado".</p> <p>2. Los poderes públicos desarrollarán, en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria, una política de inversiones tendente a adecuar la capacidad de los centros a la demanda social, teniendo en cuenta el gasto público disponible, la previsión de las necesidades de la sociedad y la compensación de los desequilibrios territoriales.</p>	
<p><b>Artículo 44. Límites máximos de admisión de estudiantes.</b></p> <p>El Gobierno, por motivos de interés general o para poder cumplir exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, <del>de acuerdo con las Comunidades Autónomas y previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria</del>, podrá establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate. Dichos límites afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.</p>	<p><b>Artículo 44. Límites máximos de admisión de estudiantes.</b></p> <p>El Gobierno, <u>previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria podrá</u>, por motivos de interés general o para poder cumplir exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate. Dichos límites afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.</p>
<p><b>Artículo 45. Becas y ayudas al estudio.</b></p> <p>1. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a remover los obstáculos de orden socioeconómico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el acceso o la continuidad de los estudios superiores a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento.</p> <p>A estos efectos, el Gobierno determinará <del>reglamentariamente y</del> con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.</p> <p>A los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares y la distancia al territorio peninsular para favorecer la movilidad y las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios.</p> <p>2. El desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y en colaboración con las Universidades.</p> <p><del>Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior</del>, para asegurar que los resultados de la aplicación del sistema general de becas y ayudas al estudio <del>se producen sin menoscabo de la garantía</del> de igualdad en la obtención <del>de éstas en todo el territorio nacional</del>, se establecerán los oportunos mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.</p> <p>3. Sobre la base de los principios de equidad y solidaridad, las Administraciones públicas y las Universidades cooperarán para articular sistemas eficaces de información, verificación y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos y para el</p>	<p><b>Artículo 45. Becas y ayudas al estudio.</b></p> <p>1. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a remover los obstáculos de orden socioeconómico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el acceso o la continuidad de los estudios superiores a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento.</p> <p>A estos efectos, el Gobierno determinará con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.</p> <p>A los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares y la distancia al territorio peninsular para favorecer la movilidad y las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios.</p> <p>2. El desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y en colaboración con las universidades, <u>con el fin de facilitar la gestión descentralizada y la atención a las peculiaridades territoriales que la legislación contemple</u>.</p> <p><u>En todo caso</u>, para asegurar que los resultados de la aplicación del sistema general de becas y ayudas al estudio <u>propicien el derecho de todos los ciudadanos a la educación y garanticen el principio</u> de igualdad en su obtención, se establecerán los oportunos mecanismos de coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas <u>en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria</u>.</p> <p>3. No se modifica</p>

<p>mejor logro de los objetivos señalados en los apanados anteriores.</p> <p>4. Con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la Universidad por razones económicas, el <b>Estado</b> y las Comunidades Autónomas así como las propias Universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos <del>a los</del> <b>estudiantes</b> y, en el caso de las Universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos.</p>	<p>4. Con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones económicas, el <b>Gobierno</b> y las Comunidades Autónomas así como las propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos <u>para el alumnado</u> y, en el caso de las universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos. <u>En todos los casos, se prestará especial atención a las personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género y personas con discapacidad, garantizando así su acceso y permanencia a los estudios universitarios.</u></p>
<p><b>Artículo 46. Derechos y deberes de los estudiantes.</b></p> <p>1. El estudio es un derecho y un deber de los estudiantes universitarios.</p> <p>2. Los Estatutos y normas de organización y funcionamiento desarrollarán los derechos y los deberes de los estudiantes, así como los mecanismos para su garantía. En los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, los estudiantes tendrán derecho a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El estudio en la Universidad de su elección, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.</li> <li>La igualdad de oportunidades y no discriminación, por circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio de sus derechos académicos.</li> <li>La orientación e información por la Universidad sobre las actividades de la misma que les afecten.</li> <li>La publicidad de las normas de las Universidades que deben regular la verificación de los conocimientos de los estudiantes.</li> <li>El asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en que se determine.</li> <li>Su representación en los órganos de gobierno y representación de la Universidad, en los términos establecidos en esta Ley y en los respectivos Estatutos o normas de organización y funcionamiento.</li> <li>La libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito universitario.</li> <li>La garantía de sus derechos, mediante procedimientos adecuados y, en su caso, la actuación del Defensor Universitario.</li> </ol> <p>3. Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes. En las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios.</p> <p>4. Los estudiantes gozarán de la protección de la Seguridad Social en los términos y condiciones que establezca la legislación vigente.</p>	<p><b>Artículo 46. Derechos y deberes de los estudiantes.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. Los Estatutos y normas de organización y funcionamiento desarrollarán los derechos y los deberes de los estudiantes, así como los mecanismos para su garantía. En los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, los estudiantes tendrán derecho a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El estudio en la Universidad de su elección, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.</li> <li>La igualdad de oportunidades y no discriminación <u>por razones de sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social</u> en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos.</li> <li>La orientación e información por la Universidad sobre las actividades de la misma que les afecten.</li> <li>La publicidad de las normas de las Universidades que deben regular la verificación de los conocimientos de los estudiantes.</li> <li>El asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en que se determine.</li> <li>Su representación en los órganos de gobierno y representación de la Universidad, en los términos establecidos en esta Ley y en los respectivos Estatutos o normas de organización y funcionamiento.</li> <li>La libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito universitario.</li> <li>La garantía de sus derechos, mediante procedimientos adecuados y, en su caso, la actuación del Defensor Universitario.</li> <li><u>Obtener reconocimiento por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.</u></li> <li><u>Recibir un trato no sexista.</u></li> <li><u>Una atención académica que permita hacer compatibles sus estudios con la actividad laboral.</u></li> </ol> <p>3. No se modifica</p> <p>4. No se modifica</p> <p>5. <u>El Gobierno aprobará un estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la constitución, las funciones, la organización y el funcionamiento de un Consejo del</u></p>

	<a href="#">estudiante universitario como órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al ministerio al que se le atribuyen las competencias en materia de universidades. La regulación del Consejo del estudiante universitario contará con la representación estudiantil de todas las universidades y, en su caso, con una adecuada participación de representantes de los consejos autonómicos de estudiantes.</a>
<b>TÍTULO IX. Del profesorado</b> <b>CAPÍTULO I. De las Universidades públicas</b>	
<b>Artículo 47. Personal docente e investigador.</b> El personal docente e investigador de las Universidades públicas estará compuesto de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado.	No se modifica
<b>Artículo 48. Normas generales.</b> 1. En los términos de la presente Ley y en el marco de sus competencias, las Comunidades Autónomas establecerán el régimen del personal docente e investigador contratado de las Universidades. Éstas, podrán contratar, en régimen laboral, personal docente e investigador entre las figuras siguientes: ayudante, profesor ayudante doctor, <del>profesor colaborador</del> , profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante. El número total del personal docente e investigador contratado no podrá superar el cuarenta y nueve por ciento del total del personal docente e investigador de la Universidad. 2. La contratación de personal docente e investigador se hará mediante concursos públicos, a los que se les dará la necesaria publicidad y cuya convocatoria será comunicada con suficiente antelación al Consejo de Coordinación Universitaria para su difusión en todas las Universidades. La selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se considerará mérito preferente estar habilitado para participar en los concursos de acceso a que se refiere el artículo 63. 3. Las Universidades podrán contratar para obra o servicio determinado a personal docente, personal investigador, personal técnico u otro personal, para el desarrollo de proyectos <del>concretos</del> de investigación científica o técnica.	<b>Artículo 48. Normas generales.</b> 1. Las Universidades podrán contratar personal docente e investigador en régimen laboral, <a href="#">a través de las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario que se regulan en esta Ley o mediante las modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo.</a> También podrán contratar personal docente, investigador, técnico u otro personal, a través del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica. <a href="#">Asimismo, las universidades podrán nombrar profesores eméritos en las condiciones previstas e esta ley.</a> 2. <a href="#">Las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario son las que se corresponden con las figuras de Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante.</a> <a href="#">El régimen de las indicadas modalidades de contratación laboral será el que se establece en esta Ley y en sus normas de desarrollo; supletoriamente, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en sus normas de desarrollo.</a> 3. La contratación de personal docente e investigador, <a href="#">excepto la figura de profesor visitante</a> , se hará mediante concurso público, al que se dará la necesaria publicidad y cuya convocatoria será comunicada con la suficiente antelación al Consejo de Universidades para su difusión en todas ellas. La selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se considerará mérito preferente estar acreditado <a href="#">o acreditada</a> para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. 4. El personal docente e investigador contratado, <a href="#">computado en equivalencias a tiempo completo</a> , no podrá superar el 49 por ciento del total del personal docente e investigador de la universidad. <a href="#">No se computará como profesorado contratado a quienes no impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales así como al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la universidad.</a> 5. En los términos de la presente Ley y en el marco de sus competencias, las Comunidades Autónomas establecerán el régimen del personal docente e investigador contratado por las universidades.
<b>Artículo 49. Ayudantes.</b> Los ayudantes serán contratados entre <del>quienes hayan superado todas las materias de estudio que se determinen en los criterios a que hace referencia el artículo 38</del> y con la	<b>Artículo 49. Ayudantes.</b> <a href="#">La contratación de Ayudantes se ajustará a las siguientes reglas:</a> a) Las universidades podrán contratar como Ayudantes <a href="#">a quienes hayan sido</a>

<p>finalidad principal de completar su formación investigadora. La contratación será con dedicación a tiempo completo, por una duración <del>no superior a cuatro años improrrogables</del>. Los ayudantes también podrán colaborar en tareas docentes en los términos que establezcan los Estatutos.</p>	<p><u>admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de doctorado y no sean doctores.</u></p> <p>b) La finalidad principal del contrato será la de completar la formación <u>docente e</u> investigadora de dichas personas. Los Ayudantes también podrán colaborar en tareas docentes en los términos que establezcan los estatutos de la universidad.</p> <p>c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo.</p> <p>d) <u>La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda de los indicados cinco años. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento durante el período de duración del contrato, interrumpirán su cómputo.</u></p>
<p><b>Artículo 50. Profesores ayudantes doctores.</b>  Los profesores ayudantes doctores serán contratados entre Doctores <del>que, durante al menos dos años, no hayan tenido relación contractual, estatutaria o como becario en la Universidad de que se trate, y acrediten haber realizado durante ese período tareas docentes y/o investigadoras en centros no vinculados a la misma.</del> Desarrollarán tareas docentes y de investigación, con dedicación a tiempo completo, por un máximo de cuatro años improrrogables.  La contratación exigirá la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.</p>	<p><b>Artículo 50. Profesores Ayudantes Doctores.</b>  <u>La contratación de Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores se ajustará a las siguientes reglas:</u></p> <p>a) El contrato se celebrará con doctores. La contratación exigirá la previa evaluación <u>positiva</u> de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine, <u>y será mérito preferente la estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo la contratación.</u></p> <p>b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de investigación.</p> <p>c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo.</p> <p>d) <u>La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda los indicados cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta entre esta figura contractual y la prevista en el artículo anterior, en la misma o distinta universidad, no podrá exceder de ocho años. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento durante el período de duración del contrato, interrumpirán su cómputo.</u></p>
<p><del><b>Artículo 51. Profesores colaboradores:</b>  Los profesores colaboradores serán contratados por las Universidades para impartir enseñanzas sólo en aquellas áreas de conocimiento que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, entre Licenciados, Arquitectos e Ingenieros o Diplomados universitarios, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos. En todo caso, deberán contar con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.</del></p>	<p><u>El artículo 51 queda sin contenido</u></p>
<p><b>Artículo 52. Profesores contratados doctores.</b>  Los profesores contratados doctores lo serán para el desarrollo de tareas de docencia y de investigación, o pelo de investigación, entre Doctores <del>que acrediten al menos tres años de actividad docente e investigadora, o prioritariamente investigadora, postdoctoral,</del> y que reciban la evaluación positiva de dicha actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externo que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.</p>	<p><b>Artículo 52. Profesores Contratados Doctores.</b>  <u>La contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores se ajustará a las siguientes reglas:</u></p> <p>a) El contrato se celebrará con doctores que reciban la evaluación positiva por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad Autónoma determine.</p> <p>b) La finalidad del contrato será la de desarrollar, <u>con plena capacidad docente e investigadora,</u> tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente de</p>

	<p>investigación.</p> <p>c) <u>El contrato será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo.</u></p>
<p><b>Artículo 53. Profesores asociados.</b></p> <p>Los profesores asociados serán contratados, con carácter temporal, y con dedicación a tiempo parcial, entre especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera de la Universidad.</p>	<p><b>Artículo 53. Profesores Asociados.</b></p> <p><u>La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las siguientes reglas:</u></p> <p>a) El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera de la universidad.</p> <p>b) <u>La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a la universidad.</u></p> <p>c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial.</p> <p>d) <u>La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, según las necesidades docentes, y se podrá renovar por periodos de igual duración, siempre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profesional fuera de la universidad.</u></p>
<p><b>Artículo 54. Profesores eméritos y visitantes.</b></p> <p>1. Las Universidades <del>públicas</del> podrán <del>contratar</del> con <del>carácter temporal</del>, en <del>régimen laboral</del> y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos, profesores eméritos entre funcionarios jubilados <del>de los cuerpos docentes universitarios</del> que hayan prestado servicios destacados a la Universidad.</p> <p>2. Los profesores visitantes serán contratados, temporalmente, entre profesores o investigadores de reconocido prestigio, <del>precedentes</del> de otras Universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros.</p>	<p><b>Artículo 54. Profesores Visitantes.</b></p> <p><u>La contratación de Profesoras y Profesores Visitantes se ajustará a las siguientes reglas:</u></p> <p>a) El contrato se podrá celebrar con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros.</p> <p>b) <u>La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes o investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experiencia docente e investigadora de los indicados profesores a la universidad.</u></p> <p>c) <u>El contrato será de carácter temporal con la duración que se acuerde entre las partes y dedicación a tiempo parcial o completo.</u></p>
	<p><b>Artículo 54 bis. Profesores Eméritos.</b></p> <p><u>Las universidades, de acuerdo con sus estatutos, podrán nombrar a Profesores Eméritos entre profesoras y profesores jubilados que hayan prestado servicios destacados a la universidad.</u></p>
<p><b>Artículo 55. Retribuciones del personal docente e investigador contratado.</b></p> <p>1. Las Comunidades Autónomas regularán el régimen retributivo del personal docente e investigador contratado en las Universidades públicas.</p> <p>2. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales <del>docentes</del>, investigadores y de gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.</p> <p>3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá establecer programas de incentivo docente e investigador que comprendan al personal docente e investigador contratado.</p> <p>4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos apartados anteriores, se asignarán previa valoración de los méritos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o por el órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.</p>	<p><b>Artículo 55. Retribuciones del personal docente e investigador contratado.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales <u>por el ejercicio de las siguientes funciones: actividad y dedicación docente, formación docente</u>, investigación, <u>desarrollo tecnológico, transferencia de conocimientos</u>, y gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.</p> <p>3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá establecer programas de incentivos para la docencia, la investigación, <u>el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento por el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado anterior</u>, que comprendan al personal docente e investigador contratado.</p> <p>4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos apartados anteriores, se asignarán previa valoración de los méritos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o por el órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine <u>en el caso de los del apartado 2 y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en el caso del apartado 3.</u></p>
<b>SECCIÓN 2.a DEL PROFESORADO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS</b>	
<p><b>Artículo 56. Cuerpos docentes universitarios.</b></p> <p>1. El profesorado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes:</p> <p>a) Catedráticos de Universidad.</p>	<p><b>Artículo 56. Cuerpos docentes universitarios.</b></p> <p>1. El profesorado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes:</p> <p>a) Catedráticos de Universidad.</p>

<p>b) Profesores Titulares de Universidad.  <del>e) Catedráticos de Escuelas Universitarias.</del>  <del>e) Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.</del></p> <p>Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad tendrán plena capacidad docente e investigadora. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias tendrán plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor, también plena capacidad investigadora.</p> <p>2. El profesorado <u>universitario</u> funcionario se regirá por <del>la presente Ley</del> y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación general de funcionarios que le sea de aplicación y por los Estatutos.</p> <p>Respecto a los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que presten sus servicios en la Universidad, corresponderá al Rector adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y régimen disciplinario, a excepción de la de separación del servicio, que será acordada por el órgano competente según la legislación de funcionarios.</p>	<p>b) Profesores Titulares de Universidad.</p> <p><u>El profesorado perteneciente a ambos cuerpos tendrá plena capacidad docente e investigadora.</u></p> <p>2. El profesorado funcionario se regirá por <u>las bases establecidas en esta Ley</u> y su desarrollo <u>por las disposiciones que, en virtud de sus competencias, dicten las Comunidades Autónomas</u> por la legislación general de funcionarios que les sea de aplicación y por los estatutos.</p> <p>Respecto a los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que presten sus servicios en la Universidad, corresponderá al Rector adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y régimen disciplinario, a excepción de la de separación del servicio, que será acordada por el órgano competente según la legislación de funcionarios.</p>
<p><b>Artículo 57. <u>Habilitación</u> nacional.</b></p> <p><del>1. El procedimiento de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios seguirá el sistema de habilitación nacional previa. Ésta vendrá definida por la categoría del cuerpo y el área de conocimiento. El Gobierno regulará el sistema de habilitación, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.</del>  <del>La habilitación faculta para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Una vez que el candidato habilitado haya sido seleccionado por una Universidad pública en el correspondiente concurso de acceso, le haya sido conferido el oportuno nombramiento y haya tomado posesión de la plaza, adquirirá la condición de funcionario de carrera del cuerpo docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios.</del></p> <p><del>2. La convocatoria de pruebas de habilitación será efectuada por el Consejo de Coordinación Universitaria y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».</del></p> <p><del>3. Las pruebas de habilitación serán públicas y cada una de ellas eliminatoria.</del></p> <p><del>4. Las pruebas de habilitación serán juzgadas por Comisiones compuestas por siete profesores del área de conocimiento correspondiente o, en su caso, afines, todos ellos pertenecientes al cuerpo de funcionarios docentes universitarios de cuya habilitación se trate, o de cuerpos docentes universitarios de iguales o superiores categorías. En el caso de que los miembros de las citadas Comisiones sean Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, Catedráticos de Escuelas Universitarias o Profesores Titulares de Universidad deberán poseer, al menos, el reconocimiento de un periodo de actividad investigadora de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, o norma que lo sustituya, y de dos de los mencionados periodos si se trata de Catedráticos de Universidad.</del>  <del>Los miembros de las Comisiones de habilitación serán elegidos por sorteo público realizado por el Consejo de Coordinación Universitaria y según el procedimiento que reglamentariamente establezca el Gobierno. Actuará de Presidente el Catedrático de Universidad más antiguo o, en su caso, el Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuelas Universitarias más antiguo. Las pruebas se celebrarán en la Universidad de adscripción del Presidente.</del>  <del>En las citadas Comisiones de habilitación, uno de sus miembros podrá ser funcionario</del></p>	<p><b>Artículo 57. <u>Acreditación</u> nacional.</b></p> <p>1. <u>El acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios mencionados en el artículo 56.1 exigirá la previa obtención de una acreditación nacional que, valorando los méritos y competencias de los aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario.</u>  <u>El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará el procedimiento de acreditación que, en todo caso, estará regido por los principios de publicidad, mérito y capacidad, en orden a garantizar una selección eficaz, eficiente, transparente y objetiva del profesorado funcionario, de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de la calidad docente e investigadora.</u></p> <p>2. <u>La acreditación será llevada a cabo mediante el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solicitantes, por comisiones compuestas por profesoras y profesores de reconocido prestigio docente e investigador pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Igualmente podrán formar parte de estas comisiones expertos de reconocido prestigio internacional o pertenecientes a los centros públicos de investigación.</u>  <u>Los currículos de los miembros de las comisiones de acreditación se harán públicos tras su nombramiento.</u>  <u>Reglamentariamente, se establecerá la composición de las comisiones reguladas en este apartado, la forma de determinación de sus componentes, así como su procedimiento de actuación y los plazos para resolver. En todo caso, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.</u></p> <p>3. <u>En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la resolución de la comisión, los interesados podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas.</u></p> <p>4. <u>Una vez finalizado el procedimiento, se expedirá a favor del aspirante el correspondiente documento de acreditación.</u></p>

<p>científico e investigador perteneciente a las Escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de acuerdo con la disposición adicional vigesimosexta.</p> <p>5. Las Comisiones, finalizadas las pruebas, elevarán propuestas vinculantes al Consejo de Coordinación Universitaria, que procederá a la habilitación de los candidatos.</p>	
<p><b>Artículo 58. Habilidadación de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias:</b></p> <p>1. A fin de obtener la habilitación para el cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, será necesario estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o, excepcionalmente, en aquellas áreas de conocimiento que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico y superar las pruebas correspondientes.</p> <p>2. La habilitación constará de dos pruebas. La primera consistirá en la presentación y discusión con la Comisión de los méritos e historial académico, docente e investigador del candidato, así como de su proyecto docente, que incluirá el programa de una de las materias o especialidades del área de conocimiento de que se trate. La segunda consistirá en la exposición y debate con la Comisión de un tema del programa presentado por el candidato y elegido por éste, de entre tres sacados a sorteo.</p> <p>3. Únicamente podrán convocarse pruebas de habilitación y concursos de acceso al cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias para aquellas áreas de conocimiento que, a estos efectos, establezca el Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.</p>	<p><u>El artículo 58 queda sin contenido</u></p>
<p><b>Artículo 59. Habilidadación de Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuelas Universitarias:</b></p> <p>1. A fin de obtener la habilitación para los cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de Escuelas Universitarias, será necesario estar en posesión del título de Doctor y superar las pruebas correspondientes.</p> <p>2. La habilitación constará de tres pruebas. La primera consistirá en la presentación y discusión con la Comisión de los méritos e historial académico, docente e investigador del candidato, así como de su proyecto docente e investigador, que incluirá el programa de una de las materias o especialidades del área de conocimiento de que se trate. La segunda consistirá en la exposición y debate con la Comisión de un tema del programa presentado por el candidato y elegido por éste, de entre tres sacados a sorteo. La tercera prueba consistirá en la exposición y debate con la Comisión de un trabajo original de investigación. Para poder formar parte de las Comisiones de habilitación los Catedráticos de Escuelas Universitarias deberán estar en posesión del título de Doctor.</p> <p>3. Únicamente podrán convocarse pruebas de habilitación y concursos de acceso al cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias para aquellas áreas de conocimiento que, a estos efectos, establezca el Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.</p>	<p><b>Artículo 59. <u>Acreditación para</u> Profesores Titulares de Universidad.</b></p> <p>1. <u>Quienes posean el título de Doctor podrán presentar solicitud para obtener la acreditación para Profesora o Profesor Titular de Universidad a la que acompañarán, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méritos que aduzcan.</u></p> <p>2. <u>Las Comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito en el plazo que se establezca.</u></p>
<p><b>Artículo 60. Habilidadación de Catedráticos de Universidad.</b></p> <p>1. A fin de obtener la habilitación para el cuerpo de Catedráticos de Universidad, será necesario tener la condición de Profesor Titular de Universidad <del>o Catedrático de Escuelas Universitarias</del> con <del>tres años de antigüedad</del> y titulación de Doctor. El Consejo de Coordinación Universitaria <del>eximirá</del> de estos requisitos a quienes acrediten tener la condición de Doctor con, al menos, ocho años de antigüedad, y obtengan informe positivo de su actividad docente e investigadora <del>por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Además habrán de superarse las pruebas</del></p>	<p><b>Artículo 60. <u>Acreditación para</u> Catedráticos de Universidad.</b></p> <p>1. <u>Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad podrán presentar una solicitud para obtener la acreditación para Catedrático o Catedrática de Universidad a la que acompañarán, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méritos que aduzcan. Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de Doctor con, al menos, ocho años de antigüedad y obtengan informe positivo de su actividad docente e investigadora.</u></p>

<p><del>correspondientes.</del></p> <p><del>2. La habilitación constará de dos pruebas. La primera consistirá en la presentación y discusión con la Comisión de los méritos e historial académico, docente e investigador del candidato. La segunda, en la presentación ante la Comisión y debate con ésta de un trabajo original de investigación.</del></p>	<p><u>de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno.</u></p> <p>2. <u>Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito en el plazo que se establezca.</u></p>
<p><b>Artículo 61. Personal de cuerpos de funcionarios docentes universitarios que ocupen plaza vinculada a servicios asistenciales de instituciones sanitarias.</b></p> <p>El personal de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios que ocupen una plaza vinculada a los servicios asistenciales de instituciones sanitarias, en áreas de conocimiento de carácter clínico asistencial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regirá por lo establecido en este artículo y los demás de esta Ley que le sean de aplicación. Dicha plaza se considerará, a todos los efectos, como un solo puesto de trabajo.</p> <p>En atención a las peculiaridades de estas plazas se regirán, también, en lo que les sea de aplicación, por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás legislación sanitaria, así como por las normas que el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo y, en su caso, de Defensa, establezca en relación con estos funcionarios. En particular, en estas normas se determinará el ejercicio de las competencias sobre situaciones administrativas, se concretará el régimen disciplinario de este personal y se establecerá, a propuesta del Ministro de Hacienda, a iniciativa conjunta de los Ministros indicados en el inciso anterior, el sistema de retribuciones aplicable al mencionado personal.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b><del>Artículo 62. Procedimiento para la habilitación:</del></b></p> <p><del>1. Las Universidades públicas, en el modo que establezcan sus Estatutos y en atención a las necesidades docentes e investigadoras, acordarán las plazas que serán provistas mediante concurso de acceso entre habilitados, a cuyo efecto lo comunicarán a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, en la forma y plazos que establezca el Gobierno.</del></p> <p><del>2. La Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria señalará el número de habilitaciones que serán objeto de convocatoria en cada área de conocimiento, en función del número de plazas comunicadas a la citada Secretaría General, a fin de garantizar la posibilidad de selección de las Universidades entre habilitados.</del></p> <p><del>3. Las Comisiones de habilitación no podrán proponer a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria la habilitación de un número mayor de candidatos al número de habilitaciones señalado en el apartado 2, pero sí un número inferior al mismo, incluso la no habilitación de candidato alguno.</del></p>	<p><b>Artículo 62. Concursos para el acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios</b></p> <p>1. <u>Las universidades, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, convocarán concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto. La convocatoria deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad Autónoma. Los plazos para la presentación a los concursos contarán desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.</u></p> <p>2. <u>A los concursos podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de acuerdo con lo regulado, para cada caso, en los artículos 59 y 60, así como los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de Universidad.</u></p> <p>3. <u>Los estatutos de cada universidad regularán la composición de las comisiones de selección de las plazas convocadas, y garantizarán, en todo caso, la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes. Dicha composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. En cualquier caso, los currículos de los miembros de las comisiones deberán hacerse públicos.</u></p> <p>4. <u>Igualmente los estatutos regularán el procedimiento que ha de regir en los concursos, que deberá valorar, en todo caso, el historial académico, docente e investigador del candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y debate en la correspondiente materia o especialidad en sesión pública.</u></p> <p>5. <u>El proceso podrá concluir con la decisión de la comisión de no proveer la plaza convocada.</u></p>

<p><b>Artículo 63. Convocatoria de concursos:</b></p> <p>1- <del>Las Universidades públicas convocarán el correspondiente concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes, siempre que las plazas estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto y que hayan sido comunicadas a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo anterior, en los plazos que reglamentariamente se establezcan. En el plazo máximo de dos años desde la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, y una vez celebradas las correspondientes pruebas de habilitación, la plaza deberá proveerse, en todo caso, siempre que haya concursantes a la misma.</del></p> <p>2- <del>Los concursos de acceso serán convocados por la Universidad y publicados en el "Boletín Oficial del Estado" y en el de la Comunidad Autónoma. Serán resueltos, en cada Universidad, por una Comisión constituida a tal efecto, de acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos. A los efectos de obtener plaza en una Universidad, podrán participar en los concursos, junto a los habilitados para el cuerpo de que se trate, los funcionarios de dicho cuerpo, y los de cuerpos docentes universitarios de iguales o superiores categorías, sea cual fuere su situación administrativa.</del></p>	<p><u>El artículo 63 queda sin contenido</u></p>
<p><b>Artículo 64. Garantías de las pruebas.</b></p> <p>1. <del>En las pruebas de habilitación y en los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto a los principios de mérito y capacidad de los mismos.</del></p> <p>2- <del>Los Estatutos regularán los procedimientos para la designación de los miembros de las Comisiones de los concursos de acceso. Se basarán en criterios objetivos y generales, y garantizarán, en todo caso, la plena competencia docente e investigadora de dichos miembros. Los miembros de las Comisiones a que se refiere el párrafo anterior, que pertenezcan a alguno de los cuerpos docentes previstos en el apartado 1 del artículo 56, deberán contar con el reconocimiento de los períodos de actividad investigadora mínimos que, para cada uno de los mencionados cuerpos, se establecen en el apartado 4 del artículo 57.</del></p> <p>3. En los concursos de acceso, las universidades harán pública la composición de las comisiones, así como los criterios para la adjudicación de las plazas.</p>	<p><b>Artículo 64. Garantías de las pruebas.</b></p> <p>1. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto a los principios de mérito y capacidad.</p> <p>2. El apartado 3 pasa a ser el apartado 2 (sin modificaciones)</p>
<p><b>Artículo 65. Nombramientos.</b></p> <p>Las Comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento. Los nombramientos, cuyo número no podrá exceder al de plazas convocadas a concurso, serán efectuados por el Rector, inscritos en el correspondiente Registro de Personal, publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad Autónoma, y comunicados al Consejo de Coordinación Universitaria.</p> <p>La plaza obtenida tras el concurso de acceso a que se refiere el artículo 63 deberá desempeñarse al menos durante dos años antes de poder participar en un nuevo concurso <del>a efectos de</del> obtener plaza en otra Universidad.</p>	<p><b>Artículo 65. Nombramientos.</b></p> <p>1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento <u>y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso</u>. El Rector procederá a los nombramientos <u>conforme a la propuesta realizada</u>, ordenará su inscripción en el correspondiente registro de personal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad Autónoma, así como su comunicación al Consejo de Universidades.</p> <p>2. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso <u>para</u> obtener una plaza en otra universidad.</p>
<p><b>Artículo 66. Comisiones de reclamaciones.</b></p> <p>1. Contra las propuestas de las Comisiones de habilitación los candidatos podrán presentar reclamación ante el Consejo de Coordinación Universitaria. Admitida la reclamación, <u>ésta</u> será valorada por una Comisión <del>formada por siete Catedráticos de</del></p>	<p><b>Artículo 66. Comisiones de reclamaciones.</b></p> <p>1. Contra las propuestas de las comisiones de acreditación, los solicitantes podrán presentar reclamación ante el Consejo de Universidades. Admitida la reclamación, será valorada por una comisión, <u>cuya composición se determinará</u></p>

<p><del>Universidad, de diversas áreas de conocimiento, con amplia experiencia docente e investigadora, designados por el Consejo de Coordinación Universitaria.</del> Esta Comisión, <del>que será presidida por el Catedrático de Universidad más antiguo,</del> examinará el expediente relativo a la prueba de habilitación para velar por las garantías <del>que establece el apartado 1 del artículo 64,</del> y ratificará o no la propuesta reclamada, en un plazo máximo de tres meses.</p> <p>2. Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector. Admitida la reclamación se suspenderán los nombramientos hasta su resolución <del>por éste.</del> Esta reclamación será valorada por una Comisión compuesta por siete Catedráticos de Universidad de diversas <del>áreas de conocimiento,</del> con amplia experiencia docente e investigadora, designados en la forma que establezcan los Estatutos. Esta Comisión examinará el expediente relativo al concurso, para velar por las garantías <del>que establece el apartado 1 del artículo 64,</del> y ratificará o no la propuesta reclamada en el plazo máximo de tres meses.</p> <p>3. Las resoluciones del Consejo de Coordinación Universitaria y del Rector a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la <del>Ley 30/1992, de 26 de noviembre.</del></p>	<p><del>reglamentariamente.</del> Esta comisión examinará el expediente relativo a la acreditación para velar por las garantías establecidas, y podrá <del>ratificar la propuesta o, en su caso, admitir la reclamación,</del> todo ello en un plazo máximo de tres meses. <del>El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.</del></p> <p>2. Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución. La reclamación será valorada por una comisión compuesta por siete catedráticos de Universidad <del>pertenecientes a</del> diversos <del>ámbitos de conocimiento,</del> designados en la forma que establezcan los estatutos, con amplia experiencia docente e investigadora. Esta comisión examinará el expediente relativo al concurso, para velar por las garantías establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada en el plazo máximo de tres meses tras lo que <del>el Rector dictará la resolución en congruencia con lo que indique la comisión. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.</del></p> <p>3. Las resoluciones del Consejo de Universidades y del Rector a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la <del>Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.</del></p>
<p><b>Artículo 67. Reingreso de excedentes al servicio activo.</b> El reingreso al servicio activo de los funcionarios de cuerpos docentes universitarios en situación de excedencia voluntaria se efectuará <del>obteniendo</del> plaza en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que cualquier Universidad convoque, de acuerdo con lo establecido en <del>el apartado 2 del artículo 63.</del> El reingreso podrá efectuarse, asimismo, en la Universidad a la que perteneciera el centro universitario de procedencia con anterioridad a la excedencia, solicitando del Rector la adscripción provisional a una plaza de la misma, con la obligación de participar en cuantos concursos de acceso se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en su cuerpo y área de conocimiento, perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo. La adscripción provisional se hará en la forma y con los efectos que, respetando los principios reconocidos por la legislación general de funcionarios en el caso del reingreso al servicio activo, determinen los Estatutos. No obstante, el reingreso será automático y definitivo, a solicitud del interesado dirigida a la Universidad de origen, siempre que hubieren transcurrido, al menos, dos años en situación de excedencia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza vacante del mismo cuerpo y área de conocimiento.</p>	<p><b>Artículo 67. Reingreso de excedentes al servicio activo.</b> El reingreso al servicio activo de los funcionarios <del>y funcionarias</del> de cuerpos docentes universitarios en situación de excedencia voluntaria se efectuará <del>mediante la obtención de una</del> plaza en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que cualquier universidad convoque, de acuerdo con lo establecido en <del>el artículo 62.</del> El reingreso podrá efectuarse, asimismo, en la Universidad a la que perteneciera el centro universitario de procedencia con anterioridad a la excedencia, solicitando del Rector la adscripción provisional a una plaza de la misma, con la obligación de participar en cuantos concursos de acceso se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en su cuerpo y área de conocimiento, perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo. La adscripción provisional se hará en la forma y con los efectos que, respetando los principios reconocidos por la legislación general de funcionarios en el caso del reingreso al servicio activo, determinen los Estatutos. No obstante, el reingreso será automático y definitivo, a solicitud del interesado dirigida a la Universidad de origen, siempre que hubieren transcurrido, al menos, dos años en situación de excedencia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza vacante del mismo cuerpo y área de conocimiento.</p>
<p><b>Artículo 68. Régimen de dedicación.</b> 1. El profesorado de las Universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación será, en todo caso, compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83, <del>de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.</del> 2. La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno que, en ningún caso, podrán ejercerse simultáneamente.</p>	<p><b>Artículo 68. Régimen de dedicación.</b> 1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación será, en todo caso, compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83. 2. No se modifica</p>
<p><b>Artículo 69. Retribuciones del personal docente e investigador funcionario.</b></p>	<p><b>Artículo 69. Retribuciones del personal docente e investigador funcionario.</b></p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Gobierno determinará el régimen retributivo del personal docente e investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios. <del>Este régimen, que tendrá carácter uniforme en todas las Universidades,</del> será el establecido por la legislación general de funcionarios, adecuado, específicamente, a las características de dicho personal. A estos efectos, el Gobierno establecerá los intervalos de niveles o categorías dentro de cada nivel correspondientes a cada cuerpo docente, los requisitos de promoción de uno a otro así como sus consecuencias retributivas.</li> <li>2. El Gobierno podrá establecer retribuciones adicionales a las anteriores y ligadas a méritos individuales <del>docentes,</del> investigadores y de gestión.</li> <li>3. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.</li> <li>4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos apartados anteriores, se asignarán previa valoración de los méritos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o por el órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Gobierno determinará el régimen retributivo del personal docente e investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios. <u>Dicho</u> régimen será el establecido por la legislación general de funcionarios, adecuado, específicamente, a las características de dicho personal. A estos efectos, el Gobierno establecerá los intervalos de niveles o categorías dentro de cada nivel correspondientes a cada cuerpo docente, los requisitos de promoción de uno a otro, así como sus consecuencias retributivas.</li> <li>2. El Gobierno podrá establecer retribuciones adicionales a las anteriores y ligadas a méritos individuales <u>por el ejercicio de las siguientes funciones: actividad y dedicación docente, formación docente,</u> investigación, <u>desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento</u> y gestión.</li> <li>3. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores, <u>de desarrollo tecnológico, de transferencia de conocimiento</u> y de gestión, <u>por el ejercicio de las funciones a que se refieren los artículos 33, 41.2 y 3.</u> Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno <u>de la universidad,</u> podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.</li> <li>4. No se modifica</li> </ol>
<p><b>Artículo 70. Relaciones de puestos de trabajo del profesorado.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cada Universidad pública establecerá anualmente, en el estado de gastos de su presupuesto la relación de puestos de trabajo de su profesorado, en la que se relacionarán, debidamente clasificadas, todas las plazas de profesorado, incluyendo al personal docente e investigador contratado.</li> <li>2. Las relaciones de puestos de trabajo de la Universidad deberán adaptarse, en todo caso, a lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 48.</li> <li>3. Las Universidades podrán modificar la relación de puestos de trabajo de su profesorado por ampliación de las plazas existentes o por minoración o cambio de denominación de las plazas vacantes, en la forma que indiquen sus Estatutos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82.</li> </ol>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Artículo 71. Áreas de conocimiento.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las denominaciones de las plazas de la relación de puestos de trabajo de profesores funcionarios de cuerpos docentes universitarios corresponderán a las de las áreas de conocimiento existentes. A tales efectos, se entenderá por área de conocimiento aquellos campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de profesores e investigadores, nacionales o internacionales.</li> <li>2. El Gobierno establecerá y, en su caso, revisará el catálogo de áreas de conocimiento, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.</li> </ol>	<p>No se modifica</p>
<b>CAPÍTULO II. De las Universidades privadas</b>	
<p><b>Artículo 72. Personal docente e investigador.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El personal docente e investigador de las Universidades privadas deberá estar en posesión de la titulación académica que se establezca en la normativa prevista en el apartado 3 del artículo 4.</li> <li>2. Con independencia de las condiciones generales que se establezcan de conformidad</li> </ol>	<p><b>Artículo 72. Personal docente e investigador.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se modifica</li> <li>2. Con independencia de las condiciones generales que se establezcan de conformidad</li> </ol>

<p>con <del>el apartado 3 del artículo 4</del>, al menos el <del>veinticinco por ciento</del> del total de su profesorado deberá estar en posesión del título de Doctor y haber obtenido la evaluación positiva de su actividad docente e investigadora <del>por parte</del> de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.</p>	<p>con el <u>artículo 4.3, al menos el 50 por ciento</u> del total de su profesorado deberá estar en posesión del título de Doctor y, <u>al menos, el 60 por ciento</u> del total de su profesorado <u>doctor</u> deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine. <u>A estos efectos, el número total de Profesores se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo. Los mismos requisitos serán de aplicación a los centros universitarios privados adscritos a universidades privadas.</u></p> <p>3. <u>El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades, no podrá ser funcionario de cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo.</u></p>
<b>TÍTULO X. Del personal de administración y servicios de las Universidades públicas</b>	
<p><b>Artículo 73. El personal de administración y servicios.</b></p> <p>1. El personal de administración y servicios de las Universidades estará formado por personal funcionario de las escalas de las propias Universidades y personal laboral contratado por la propia Universidad, así como por personal funcionario perteneciente a los cuerpos y escalas de otras Administraciones públicas.</p> <p>2. Corresponde al personal de administración y servicios de las Universidades públicas el apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas, el ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, bibliotecas, información, servicios generales, así como cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de soporte que se determine necesario para la Universidad en el cumplimiento de sus objetivos.</p> <p>3. El personal funcionario de administración y servicios se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación general de funcionarios, y por las disposiciones de desarrollo de ésta que elaboren las Comunidades Autónomas, y por los Estatutos de su Universidad. El personal laboral de administración y servicios, además de las previsiones de esta Ley y sus normas de desarrollo y de los Estatutos de su Universidad, se regirá por la legislación laboral y los convenios colectivos aplicables.</p>	<p><b>Artículo 73. El personal de administración y servicios.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. <u>Corresponde al personal de administración y servicios la gestión técnica, económica y administrativa, así como el apoyo, asesoramiento y asistencia en el desarrollo de las funciones de la universidad.</u> Corresponde al personal de administración y servicios de las universidades públicas el apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas, el ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, bibliotecas, información, servicios generales, <u>servicios científico-técnicos, así como el soporte a la investigación y la transferencia de tecnología y a</u> cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de soporte que se determine necesario para la universidad en el cumplimiento de sus objetivos.</p> <p>3. No se modifica</p>
<p><b>Artículo 74. Retribuciones.</b></p> <p>1. El personal de administración y servicios de las Universidades será retribuido con cargo a los presupuestos de las mismas.</p> <p>2. Las Universidades establecerán el régimen retributivo del personal funcionario, dentro de los límites máximos que determine la Comunidad Autónoma y en el marco de las bases que dicte el Estado.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Artículo 75. Selección.</b></p> <p>1. Las Universidades podrán crear escalas de personal propio de acuerdo con los grupos de titulación exigidos de conformidad con la legislación general de la función pública.</p> <p>2. La selección del personal de administración y servicios se realizará mediante la superación de las pruebas selectivas de acceso, del modo que establezcan las leyes y los Estatutos que le son de aplicación y atendiendo a los principios de igualdad,</p>	<p>No se modifica</p>

<p>mérito y capacidad. Se garantizará, en todo caso, la publicidad de las correspondientes convocatorias mediante su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y en el de la Comunidad Autónoma.</p> <p>3. Los principios establecidos en el apartado 2 se observarán también para la selección del personal contratado.</p>	
<p><b>Artículo 76. Provisión de las plazas.</b></p> <p>1. La provisión de puestos de personal de administración y servicios de las Universidades se realizará por el sistema de concursos, a los que podrán concurrir tanto el personal propio de <del>las mismas</del> como el personal de otras Universidades. El personal perteneciente a cuerpos y escalas de las Administraciones públicas podrá concurrir en las condiciones que reglamentariamente se determinen.</p> <p>2. Sólo podrán cubrirse por el sistema de libre designación aquellos puestos que se determinen por las Universidades atendiendo a la naturaleza de sus funciones, y de conformidad con la normativa general de la función pública.</p> <p>3. Los Estatutos establecerán las normas para asegurar la provisión de las vacantes que se produzcan y el perfeccionamiento y promoción profesional del personal, de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.</p> <p>4. Las Universidades promoverán las condiciones para que el personal de administración y servicios pueda desempeñar sus funciones en Universidades distintas de la de origen. A tal fin, podrán formalizarse convenios entre las Universidades o con otras Administraciones públicas que garanticen el derecho a la movilidad de su respectivo personal bajo el principio de reciprocidad.</p>	<p><b>Artículo 76. Provisión de las plazas.</b></p> <p>1. La provisión de puestos de personal de administración y servicios de las universidades se realizará por el sistema de concursos, a los que podrán concurrir tanto el personal propio de <u>aquellas</u> como el personal de otras universidades. El personal perteneciente a cuerpos y escalas de las Administraciones públicas podrá concurrir en las condiciones que reglamentariamente se determinen.</p> <p>2. No se modifica</p> <p>3. No se modifica</p> <p>4. Pasa al artículo 76 bis</p>
	<p><b>Artículo 76 bis. Formación y movilidad.</b></p> <p>1. <u>Las universidades fomentarán la formación permanente del personal de administración y servicios. A tal efecto, facilitarán que dicho personal pueda seguir programas que aumenten sus habilidades y competencias profesionales.</u></p> <p>2. Las universidades promoverán las condiciones para que el personal de administración y servicios pueda desempeñar sus funciones en universidades distintas de la de origen. A tal fin, podrán formalizarse convenios entre las universidades o con otras Administraciones públicas que garanticen el derecho a la movilidad de su respectivo personal bajo el principio de reciprocidad.</p>
<p><b>Artículo 77. Situaciones.</b></p> <p>Corresponde al Rector de la Universidad adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y régimen disciplinario para los funcionarios de administración y servicios que desempeñen funciones en las mismas, con excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano competente según la legislación de funcionarios. Igualmente, corresponde al Rector la aplicación del régimen disciplinario en el caso del personal laboral.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Artículo 78. Representación y participación.</b></p> <p>Se garantizará la participación del personal de administración y servicios en los órganos de gobierno y representación de las Universidades, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en los Estatutos.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>TÍTULO XI. Del régimen económico y financiero de las Universidades públicas</b></p>	
<p><b>Artículo 79. Autonomía económica y financiera.</b></p> <p>1. Las Universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la presente Ley. A tal efecto, <del>deberán disponer</del> de recursos <u>suficientes</u> para <del>el desempeño de sus funciones</del>.</p>	<p><b>Artículo 79. Autonomía económica y financiera.</b></p> <p>1. Las Universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la presente Ley. A tal efecto, <u>se garantizará que las universidades dispongan</u> de <u>los</u> recursos <u>necesarios</u> para <u>un funcionamiento básico de calidad</u>.</p>

<p>2. En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades públicas se registrarán por lo previsto en este Título y en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector público.</p>	<p>2. No se modifica</p>
<p><b>Artículo 80. Patrimonio de la Universidad.</b></p> <p>1. Constituye el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones. Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen, así como sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que los tributos y exenciones recaigan directamente sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes, a no ser que sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria.</p> <p>2. Las Universidades asumen la titularidad de los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones, así como los que, en el futuro, se destinen a estos mismos fines por el Estado o por las Comunidades Autónomas. Se exceptúan, en todo caso, los bienes que integren el Patrimonio Histórico Español. Cuando los bienes a los que se refiere el primer inciso de este apartado dejen de ser necesarios para la prestación del servicio universitario, o se empleen en funciones distintas de las propias de la Universidad, la Administración de origen podrá reclamar su reversión, o bien, si ello no fuere posible, el reembolso de su valor al momento en que procedía la reversión.</p> <p>Las Administraciones públicas podrán adscribir bienes de su titularidad a las Universidades públicas para su utilización en las funciones propias de las mismas.</p> <p>3. La administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en esta materia. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio Histórico Español, los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor serán acordados por la Universidad, con la aprobación del Consejo Social, de conformidad con las normas que, a este respecto, determine la Comunidad Autónoma.</p> <p>4. En cuanto a los beneficios fiscales de las Universidades públicas, se estará a lo dispuesto para las entidades sin finalidad lucrativa en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. Las actividades de mecenazgo en favor de las Universidades públicas gozarán de los beneficios que establece la mencionada Ley.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Artículo 81. Programación y presupuesto.</b></p> <p>1. En el marco de lo establecido por las Comunidades Autónomas, las Universidades podrán elaborar programaciones plurianuales que puedan conducir a la aprobación, por las Comunidades Autónomas, de convenios y contratos-programa que incluirán sus objetivos, financiación y la evaluación del cumplimiento de los mismos.</p> <p>2. El presupuesto será público, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos.</p> <p>3. El presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos:</p> <p>a) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas, anualmente, por las Comunidades Autónomas.</p> <p>b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria que estarán relacionados con</p>	<p>No se modifica</p>

<p>los costes de prestación del servicio. Asimismo, se consignarán las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos y demás derechos.</p> <p>c) Los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a las demás actividades autorizadas a las Universidades se atenderán a lo que establezca el Consejo Social, debiendo ser, en todo caso, aprobados junto con los presupuestos anuales en los que se deban aplicar.</p> <p>d) Los ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y privadas, así como de herencias, legados o donaciones.</p> <p>e) Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades económicas que desarrollen según lo previsto en esta Ley y en sus propios Estatutos.</p> <p>f) Todos los ingresos procedentes de los contratos previstos en el artículo 83.</p> <p>g) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso.</p> <p>h) El producto de las operaciones de crédito que concierten, debiendo ser compensado para la consecución del necesario equilibrio presupuestario de la Comunidad Autónoma, la cual, en todo caso, deberá autorizar cualquier operación de endeudamiento.</p> <p>4. La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los documentos que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se establezcan para el sector público. En este marco, a los efectos de la normalización contable, las Comunidades Autónomas podrán establecer un plan de contabilidad para las Universidades de su competencia. Al estado de gastos corrientes, se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma. Los costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios, deberán ser autorizados por la Comunidad Autónoma.</p> <p>5. Las Universidades están obligadas a rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las Universidades enviarán al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que constituyan sus cuentas anuales en el plazo establecido por las normas aplicables de cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, en la legislación general. Recibidas las cuentas en la Comunidad Autónoma, se remitirán al órgano de fiscalización de cuentas de la misma o, en su defecto, al Tribunal de Cuentas.</p>	
<p><b>Artículo 82. Desarrollo y ejecución de los presupuestos.</b> Las Comunidades Autónomas establecerán las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las Universidades, así como para el control de las inversiones, gastos e ingresos de aquéllas, mediante las correspondientes técnicas de auditoría, bajo la supervisión de los Consejos Sociales. Será legislación supletoria en esta materia la normativa que, con carácter general, sea de aplicación al sector público.</p>	No se modifica
<p><b>Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas.</b> 1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o</p>	<p><b>Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas.</b> 1. No se modifica</p>

<p>de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.</p> <p>2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.</p>	<p>2. No se modifica</p> <p>3. <u>Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, los profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que fundamenten su vinculación a los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.</u>  <u>El Gobierno regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.</u></p>
<p><b>Artículo 84. Creación de fundaciones u otras personas jurídicas.</b>  Para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades, con la aprobación del Consejo Social, podrán crear, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable.  La dotación fundacional o la aportación al capital social y cualesquiera otras aportaciones a las entidades que prevé el párrafo anterior, con cargo a los presupuestos de la Universidad, quedarán sometidas a las normas que, a tal fin, establezca la Comunidad Autónoma.  Las entidades en las que las Universidades tengan participación mayoritaria en su capital o fondo patrimonial equivalente quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias Universidades.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>TÍTULO XII. De los centros en el extranjero o que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros</b></p>	
<p><b>Artículo 85. Centros en el extranjero.</b>  1. Los centros dependientes de Universidades españolas sitos en el extranjero, que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, tendrán una estructura y un régimen singularizados a fin de acomodarlos a las exigencias del entorno, de acuerdo con lo que determine el Gobierno, y con lo que, en su caso, dispongan los convenios internacionales.  En todo caso, su creación y supresión será acordada por el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Asuntos Exteriores, a propuesta de Consejo Social de la Universidad, y previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad, aprobada por la Comunidad Autónoma competente, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.</p>	<p>No se modifica</p>

<p>2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para poder impartir en el extranjero enseñanzas de modalidad presencial, conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.</p>	
<p><b>Artículo 86. Centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros.</b></p> <p>1. El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el marco general en el que habrán de impartirse en España enseñanzas conducentes a la obtención de títulos extranjeros de educación superior universitaria, así como las condiciones que habrán de reunir los centros que pretendan impartir tales enseñanzas.</p> <p>El establecimiento en España de centros que, bajo cualquier modalidad, impartan las enseñanzas a que se refiere el párrafo anterior, requerirá la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se pretenda el establecimiento, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.</p> <p>2. En los términos que establezca la normativa a que se refiere el apartado anterior, los centros regulados en este artículo estarán sometidos, en todo caso, a la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en su caso, del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine. En este segundo supuesto, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación recibirá, en todo caso, copia del mencionado informe.</p> <p>3. Los títulos y enseñanzas de educación superior correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España sólo podrán ser sometidos al trámite de homologación o convalidación si los centros donde se realizaron los citados estudios se hubieran establecido de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, y las enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende estuvieran efectivamente implantadas en la Universidad o centro extranjero que hubiera expedido el título. Reglamentariamente, y a los efectos de dicha homologación, el Gobierno regulará las condiciones de acceso a los estudios en dichos centros.</p> <p>4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales suscritos por España o, en su caso, de la aplicación del principio de reciprocidad.</p> <p>5. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento por parte de los centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros, de lo establecido en el presente artículo, así como por que los estudiantes que se matriculen en ellos dispongan de una correcta información sobre las enseñanzas y los títulos a los que pueden acceder.</p>	<p>No se modifica</p>
<b>TÍTULO XIII. Espacio europeo de enseñanza superior</b>	
<p><b>Artículo 87. De la integración en el espacio europeo de enseñanza superior.</b></p> <p>En el ámbito de sus respectivas competencias el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Universidades adoptarán las medidas necesarias para la plena integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior.</p>	<p><b>Artículo 87. De la integración en el espacio europeo de enseñanza superior.</b></p> <p>En el ámbito de sus respectivas competencias el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades adoptarán las medidas necesarias para <b>completar</b> la plena integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior.</p>
<p><b>Artículo 88. De las enseñanzas y títulos.</b></p> <p>1. A fin de promover la más amplia movilidad de estudiantes y titulados españoles en el espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno, previo informe del Consejo de <del>Coordinación—Universitaria</del>, adoptará las medidas que aseguren que los títulos oficiales expedidos por las Universidades españolas se acompañen de <del>aquellos</del></p>	<p><b>Artículo 88. De las enseñanzas y títulos.</b></p> <p>1. A fin de promover la más amplia movilidad de estudiantes y titulados españoles en el espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno, previo informe del Consejo de <del>Universidades</del>, adoptará las medidas que aseguren que los títulos oficiales expedidos por las universidades españolas se acompañen del <b>suplemento europeo al título</b>.</p>

<p><del>elementos de información que garanticen la transparencia acerca del nivel y contenidos de las enseñanzas certificadas por dicho título.</del></p> <p>2- <del>No obstante lo dispuesto en el artículo 37, y con el fin de cumplir las líneas generales que emanen del espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá, reformará o adaptará las modalidades ciclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional correspondiente a las mismas. Cuando estos títulos sustituyan a los indicados en el citado artículo 37, el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, determinará las condiciones para la homologación de éstos a los nuevos títulos, así como para la convalidación o adaptación de las enseñanzas que los mismos refrenden.</del></p> <p>3. Asimismo, el Gobierno, previo informe del Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del>, establecerá las normas necesarias para que la unidad de medida del haber académico, correspondiente a la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, sea el crédito europeo <del>o cualquier otra unidad que se adopte en el espacio europeo de enseñanza superior, y para que las Universidades acompañen a los títulos oficiales que expidan, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 34 de la presente Ley, el suplemento europeo al título.</del></p> <p>4. El <del>Estado</del>, las Comunidades Autónomas y las Universidades fomentarán la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo de enseñanza superior a través de programas de becas y ayudas y créditos al estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y ayudas de la Unión Europea.</p>	<p>2. Asimismo, el Gobierno, previo informe del Consejo de <u>Universidades</u>, establecerá las normas necesarias para que la unidad de medida del haber académico, correspondiente a la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, sea el crédito europeo.</p> <p>3. El <u>Gobierno</u>, las Comunidades Autónomas y las universidades fomentarán la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo de enseñanza superior a través de programas de becas y ayudas y créditos al estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y ayudas de la Unión Europea.</p>
<p><b>Artículo 89. Del profesorado.</b></p> <p>1. El profesorado de las Universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aquéllas una posición equivalente a las de Catedrático o Profesor Titular de Universidad o de Catedrático o Profesor Titular de Escuelas Universitarias será considerado <u>habilitado</u> a los efectos previstos en esta Ley, según el procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno, previo informe del Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del>.</p> <p>2. El profesorado al que se refiere el apartado 1 podrá formar parte de las Comisiones a que se refiere el artículo 57 <del>de la presente Ley</del> y, si las Universidades así lo establecen en sus Estatutos, de las Comisiones encargadas de resolver los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.</p> <p>3. A los efectos de la concurrencia a <del>las pruebas de habilitación</del> y concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios y a las convocatorias de contratos de profesorado que prevé esta Ley, los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea gozarán de idéntico tratamiento, y con los mismos efectos, al de los nacionales españoles. Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a los nacionales de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.</p> <p>4. El <del>Estado</del>, las Comunidades Autónomas y las Universidades fomentarán la movilidad de los profesores en el espacio europeo de enseñanza superior a través de programas y convenios específicos y de los programas de la Unión Europea.</p>	<p><b>Artículo 89. Del profesorado.</b></p> <p>1. El profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aquéllas una posición equivalente a las de Catedrático o Profesor Titular de Universidad o de Catedrático o Profesor Titular de Escuelas Universitarias será considerado <u>acreditado</u> a los efectos previstos en esta Ley, según el procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno, previo informe del Consejo de <u>Universidades</u>.</p> <p>2. El profesorado al que se refiere el apartado 1 podrá formar parte de las comisiones a que se refiere el artículo 57 y, si las universidades así lo establecen en sus estatutos, de las comisiones encargadas de resolver los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.</p> <p>3. A los efectos de la concurrencia a <u>los procedimientos de acreditación, a los</u> concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios y a las convocatorias de contratos de profesorado que prevé esta Ley, los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea gozarán de idéntico tratamiento, y con los mismos efectos, al de los nacionales españoles. Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a los nacionales de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se encuentra definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.</p> <p>4. El <u>Gobierno</u>, las Comunidades Autónomas y las universidades fomentarán la movilidad de los profesores en el espacio europeo de enseñanza superior a través de programas y convenios específicos y de los programas de la Unión Europea.</p>

	5. <u>El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades impulsarán la realización de programas dirigidos a la renovación metodológica de la enseñanza universitaria para el cumplimiento de los objetivos de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior.</u>
	<b>Artículo 89 bis. Del personal de administración y servicios.</b> <u>El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades fomentarán la movilidad del personal de administración y servicios en el espacio europeo de enseñanza superior a través de programas y convenios específicos, y en su caso, de los que instituya la Unión Europea.</u>
<b>TÍTULO XIV. Del deporte y la extensión universitaria</b>	
	<b>Artículo 90. Del deporte en la universidad</b> 1. <u>1. La práctica deportiva en la universidad es parte de la formación del alumnado y se considera de interés general para todos los miembros de la comunidad universitaria. Corresponde a las universidades en virtud de su autonomía la ordenación y organización de actividades y competiciones deportivas en su ámbito respectivo.</u> 2. <u>2. Las universidades establecerán las medidas oportunas para favorecer la práctica deportiva de los miembros de la comunidad universitaria y, en su caso, proporcionarán instrumentos para la compatibilidad efectiva de esa práctica con la formación académica de los estudiantes.</u>
	<b>Artículo 91. Coordinación en materia de deporte universitario</b> 1. <u>Corresponde a las Comunidades Autónomas la coordinación en materia de deporte universitario en el ámbito de su territorio.</u> 2. <u>Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades y a propuesta de la Conferencia General de Política Universitaria, dictará las disposiciones necesarias para la coordinación general de las actividades deportivas de las universidades y articulará fórmulas para compatibilizar los estudios de deportistas de alto nivel con sus actividades deportivas.</u>
	<b>Artículo 92. De la cooperación internacional y la solidaridad.</b> <u>Las universidades fomentarán la participación de los miembros de la comunidad universitaria en actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario.</u>
	<b>Artículo 93. De la cultura universitaria.</b> <u>Es responsabilidad de la universidad conectar al universitario con el sistema de ideas vivas de su tiempo. A tal fin, las universidades arbitrarán los medios necesarios para potenciar su compromiso con la reflexión intelectual, la creación y la difusión de la cultura. Específicamente las universidades promoverán el acercamiento de las culturas humanística y científica y se esforzarán por transmitir el conocimiento a la sociedad mediante la divulgación de la ciencia.</u>
<b>DISPOSICIONES ADICIONALES</b>	
<b>Disposición adicional primera. De las Universidades creadas o reconocidas por Ley de las Cortes Generales.</b> Las Cortes Generales y el Gobierno ejercerán las competencias que la presente Ley atribuye, respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en cuanto se refiere a las Universidades creadas o reconocidas por Ley de las Cortes Generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, y en atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, a la Universidad	No se modifica

<p>Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.</p> <p><b>Disposición adicional segunda. De la Universidad Nacional de Educación a Distancia.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia impartirá enseñanza universitaria a distancia en todo el territorio nacional.</li> <li>2. En atención a sus especiales características, el Gobierno establecerá, sin perjuicio de los principios recogidos en esta Ley, una regulación específica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tendrá en cuenta, en todo caso, el régimen de sus centros asociados y de convenios con las Comunidades Autónomas y otras entidades públicas y privadas, las específicas obligaciones docentes de su profesorado, así como el régimen de los tutores.</li> <li>3. Dicha regulación, de acuerdo con las previsiones del artículo 7, contemplará la creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual específicamente dedicado a esta modalidad de enseñanza en los distintos ciclos de los estudios universitarios. Dada la modalidad especial de la enseñanza y la orientación finalista de este centro, tanto su organización, régimen de su personal y procedimientos de gestión, así como su financiación, serán objeto de previsiones particulares respecto del régimen general de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.</li> </ol>	<p><b>Disposición adicional segunda. De la Universidad Nacional de Educación a Distancia.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se modifica</li> <li>2. No se modifica</li> <li>3. No se modifica</li> <li>4. <a href="#"><u>El recurso al endeudamiento por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia habrá de autorizarse por una norma con rango de ley. No obstante, a lo largo del ejercicio presupuestario, para atender a desfases temporales de tesorería, la Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá recurrir a la contratación e pólizas de crédito o préstamos, en una cuantía que no superará el cinco por ciento de su presupuesto, que habrán de quedar cancelados antes del 31 de diciembre de cada año.</u></a></li> </ol>
<p><b>Disposición adicional tercera. De la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, centro universitario de alta cultura, investigación y especialización en el que convergen actividades de distintos grados y especialidades universitarias, tiene por misión difundir la cultura y la ciencia, fomentar las relaciones de intercambio e información científica y cultural de interés internacional e interregional y el desarrollo de actividades de alta investigación y especialización. A tal fin, organizará y desarrollará, conforme a lo establecido en la presente Ley, enseñanzas de tercer ciclo que acreditará con los correspondientes títulos oficiales de Doctor y otros títulos y diplomas de postgrado que la misma expida.</li> <li>2. En atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo mantendrá su carácter de Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y plena capacidad para realizar todo género de actos de gestión y disposición para el cumplimiento de sus fines, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes.</li> <li>3. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo gozará de autonomía en el ejercicio de sus funciones docentes, investigadoras y culturales, en el marco de su específico régimen legal.</li> <li>4. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo se regirá por la normativa propia de los Organismos autónomos a que se refiere el artículo 43.1 .a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, por las disposiciones de esta Ley que le resulten aplicables y por el</li> </ol>	<p>No se modifica</p>

<p>correspondiente Estatuto.</p>	
<p><b>Disposición adicional cuarta. De las Universidades de la Iglesia Católica.</b></p> <p>1. La aplicación de esta Ley a las Universidades y otros centros de la Iglesia Católica se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.</p> <p>2. Las Universidades establecidas o que se establezcan en España por la Iglesia Católica con posterioridad al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, quedarán sometidas a lo previsto por esta Ley para las Universidades privadas, a excepción de la necesidad de Ley de reconocimiento.</p> <p>En los mismos términos, los centros universitarios de ciencias no eclesiásticas no integrados como centros propios en una Universidad de la Iglesia Católica, y que ésta establezca en España, se sujetarán, para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a lo previsto por esta Ley para los centros adscritos a una Universidad pública.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional quinta. De los colegios mayores y residencias universitarias.</b></p> <p>1. Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica de los residentes, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.</p> <p>2. El funcionamiento de los colegios mayores se regulará por los Estatutos de cada Universidad y los propios de cada colegio mayor y gozarán de los beneficios y exenciones fiscales de la Universidad a la que estén adscritos.</p> <p>3. Las Universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos.</p>	<p><b>Disposición adicional quinta. De los colegios mayores y residencias universitarias.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. El funcionamiento de los colegios mayores <u>o residencias</u> se regulará por los estatutos de cada universidad y los propios de cada colegio mayor <u>o residencia</u> y gozarán de los beneficios <u>o</u> exenciones fiscales de la universidad a la que estén adscritos.</p> <p>3. No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional sexta. De otros centros docentes de educación superior.</b></p> <p>Los centros docentes de educación superior que, por la naturaleza de las enseñanzas que impartan o los títulos o diplomas que estén autorizados a expedir, no se integren o no proceda su integración o adscripción a una Universidad, conforme a los términos de la presente Ley, se regirán por las disposiciones específicas que les sean aplicables.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional séptima. Del régimen de conciertos entre Universidades e instituciones sanitarias.</b></p> <p>Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecer las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias y establecimientos sanitarios, en las que se deba impartir enseñanza universitaria, a efectos de garantizar la docencia práctica de Medicina, Farmacia y Enfermería y otras enseñanzas que así lo exigieran.</p> <p>En dichas bases generales, se preverá la participación de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas en los conciertos singulares que, conforme a aquéllas, se suscriban entre Universidades e instituciones sanitarias.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional octava. Del modelo de financiación de las Universidades públicas.</b></p> <p>A efectos de lo previsto en el artículo 79, el Consejo de Coordinación Universitaria elaborará un modelo de costes de referencia de las Universidades públicas que, atendiendo a las necesidades mínimas de éstas, y con carácter meramente indicativo, contemple criterios y variables que puedan servir de estándar para la elaboración de modelos de financiación por los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias y</p>	<p>No se modifica</p>

dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria, y a las Universidades para el desarrollo de sus políticas de financiación.	
<p><b>Disposición adicional novena. De los cambios sobrevenidos en las Universidades privadas y centros de educación superior adscritos a Universidades públicas.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El reconocimiento de las Universidades privadas caducará en el caso de que, transcurrido el plazo fijado por la Ley de reconocimiento, no se hubiera solicitado la autorización para el inicio de las actividades académicas o ésta fuera denegada por falta de cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.</li> <li>2. A solicitud de una Universidad privada, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, y conforme al procedimiento que ésta establezca, podrá dejar sin efecto el reconocimiento de los centros o enseñanzas existentes en dicha Universidad. Ésta garantizará que los estudiantes que cursen las correspondientes enseñanzas puedan finalizarlas conforme a las reglas generales para la extinción de los planes de estudios. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación, asimismo, en el caso de supresión de centros adscritos a Universidades públicas.</li> <li>3. Si con posterioridad al inicio de sus actividades la Comunidad Autónoma apreciara que una Universidad privada o un centro universitario adscrito a una Universidad pública incumple los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico o los compromisos adquiridos al solicitarse su reconocimiento, o se separa de las funciones institucionales de la Universidad contemplados en el artículo 1, requerirá de la Universidad la regularización en plazo de la situación. Transcurrido éste sin que tal regularización se hubiera producido, previa audiencia de la Universidad privada o del centro universitario adscrito, la Comunidad Autónoma podrá revocar el reconocimiento de los centros o enseñanzas afectados o lo comunicará a la Asamblea Legislativa, a efectos de la posible revocación del reconocimiento de la Universidad privada.</li> </ol>	No se modifica
<p><b>Disposición adicional décima. De la movilidad temporal del personal de las Universidades.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los poderes públicos promoverán mecanismos de movilidad entre las Universidades y otros centros de investigación, con sus correspondientes programas de financiación. Asimismo, promoverán medidas de fomento y colaboración entre las Universidades, centros de enseñanzas no universitarias, Administraciones públicas, empresas y otras entidades, públicas o privadas, para favorecer la movilidad temporal entre su personal y el que presta sus servicios en estas entidades.</li> <li>2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la singularidad de las Universidades de los territorios insulares y la distancia al territorio peninsular. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Universidades establecerán, coordinadamente, una línea de fomento para la movilidad de los ayudantes.</li> </ol>	No se modifica
<p><b>Disposición adicional undécima. De los nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los contratos de profesorado que prevé esta Ley no estarán sujetos a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad.</li> <li>2. Para los nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea la participación en las pruebas de habilitación que prevé esta Ley no estará sujeta a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los habilitados de nacionalidad extranjera no comunitaria podrán tomar parte en los concursos de acceso y, en su caso, acceder a la función pública docente universitaria,</li> </ol>	No se modifica

<p>cuando en el Estado de su nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios en la Universidad española.</p>	
<p><b>Disposición adicional duodécima. De los profesores asociados conforme al artículo 105 de la Ley General de Sanidad.</b>  Los profesores asociados cuya plaza y nombramiento traigan causa del apartado 2 del artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regirán por las normas propias de los profesores asociados de la Universidad, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en cuanto a la duración de sus contratos.  El número de plazas de profesores asociados que se determine en los conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias no será tomado en consideración a los efectos del porcentaje que establece el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 48.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional decimotercera. De la contratación de personal investigador, científico o técnico conforme a la Ley 13/1986, de 14 de abril de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.</b>  Las posibilidades de contratación de personal previstas en esta Ley para las Universidades públicas se entienden sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en la redacción dada por la disposición adicional séptima de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional decimocuarta. Del Defensor Universitario.</b>  Para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, las Universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.  Corresponderá a los Estatutos establecer el procedimiento para su elección o designación, duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional decimoquinta. Del acceso a los distintos ciclos de los estudios universitarios.</b>  En las directrices generales de los planes de estudios <del>a que se refiere el apartado 1 del artículo 34</del>, el Gobierno, previo informe del Consejo de <del>Coordinación Universitaria</del>, establecerá las condiciones para el paso de un ciclo a otro de aquéllos en que se estructuran los estudios universitarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 <del>y el apartado 2 del artículo 88</del>, así como para el acceso a los distintos ciclos desde enseñanzas o titulaciones universitarias o no universitarias que hayan sido declaradas equivalentes a las universitarias a todos los efectos.</p>	<p><b>Disposición adicional decimoquinta. Del acceso a los distintos ciclos de los estudios universitarios.</b>  En las directrices <u>y condiciones previstas en el</u> artículo <u>35.1</u>, el Gobierno, previo informe del Consejo de <u>Universidades</u>, establecerá las condiciones para el paso de un ciclo a otro de aquéllos en que se estructuran los estudios universitarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 37, así como para el acceso a los distintos ciclos desde enseñanzas o titulaciones universitarias o no universitarias que hayan sido declaradas equivalentes a las universitarias a todos los efectos.</p>
<p><b>Disposición adicional decimosexta. De los títulos de especialista para profesionales sanitarios.</b>  Los títulos de especialista para profesionales sanitarios serán expedidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se regularán por su normativa específica.  Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones de la Unión Europea que resulten aplicables, la creación, cambio de denominación o supresión de</p>	<p>No se modifica</p>

<p>especialidades y la determinación de las condiciones para su obtención, expedición y homologación. La disposición adicional decimonovena de esta Ley resultará aplicable a la denominación de dichos títulos de especialista.</p>	
<p><del><b>Disposición adicional decimoséptima. De las actividades deportivas de las Universidades.</b> El Gobierno, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, dictará las disposiciones necesarias para coordinar las actividades deportivas de las Universidades con el fin de asegurar su proyección nacional e internacional y articular fórmulas para compatibilizar los estudios de deportistas de alto nivel con sus actividades deportivas.</del></p>	<p><u>La disposición adicional 17ª queda sin contenido</u></p>
<p><b>Disposición adicional decimoctava. De las exenciones tributarias.</b> Las exenciones tributarias a las que se refiere la presente Ley, en cuanto afecten a las Universidades situadas en Comunidades Autónomas que gocen de un régimen tributario foral, se adecuarán a lo que se establece en la Ley Orgánica aplicable a esa Comunidad.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional decimonovena. De las denominaciones.</b> Sólo podrá utilizarse la denominación de Universidad, o las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y órganos unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. No podrán utilizarse aquellas otras denominaciones que, por su significado, puedan inducir a confusión con aquéllas.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional vigésima. Del Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas.</b> 1. En el Ministerio de Educación, <del>Cultura y Deporte</del> existirá <del>con carácter meramente informativo</del> un Registro <del>Nacional</del> de Universidades y centros y <del>estructuras universitarias que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de estas mismas enseñanzas.</del> Este Registro, que tendrá carácter público, <del>se denominará Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. La inscripción en el mismo será requisito necesario para la inclusión de los correspondientes títulos que expidan las Universidades en el Registro Nacional de Títulos Universitarios Oficiales.</del> 2. <del>Las Comunidades Autónomas o los registros públicos dependientes de las mismas tendrán que dar traslado al Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas, mencionado en el apartado anterior, de los datos a que se refiere el mismo.</del> 3. <del>Las Comunidades Autónomas o los registros públicos dependientes de las mismas tendrán que dar traslado al Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas, de la inscripción de las Universidades privadas. En dicho Registro habrá de quedar constancia de la persona o personas, físicas o jurídicas, promotoras o que, en su caso, ostenten algún tipo de titularidad sobre la Universidad privada en cuanto persona jurídica, de los cambios que se efectúen en relación con las mismas, así como de las alteraciones que puedan producirse en la naturaleza y estructura de la Universidad privada en cuanto persona jurídica. Se presumirá el carácter de promotor o titular de quien figure como tal en el mencionado Registro.</del></p>	<p><b>Disposición adicional vigésima. Registro de universidades, centros y títulos.</b> En el Ministerio de Educación <u>y Ciencia</u> existirá un Registro de universidades, centros y <u>títulos. Este registro tendrá carácter público y en él se inscribirán, además de las universidades y centros, los títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional. Podrán inscribirse también otros títulos a efectos informativos que expidan las universidades. El Gobierno regulará su régimen, organización y funcionamiento.</u></p>
<p><b>Disposición adicional vigésima primera. De la excepción de clasificación como contratistas a las Universidades.</b> En los supuestos del artículo 83 no será exigible la clasificación como contratistas a las Universidades para ser adjudicatarias de contratos con las Administraciones públicas.</p>	<p>No se modifica</p>

<p><b>Disposición adicional vigésima segunda. Del régimen de Seguridad Social de profesores asociados, visitantes y eméritos.</b></p> <p>1. En la aplicación del régimen de Seguridad Social a los profesores asociados y a los profesores visitantes, se procederá como sigue:</p> <p>a) Los que sean funcionarios públicos sujetos al régimen de clases pasivas del Estado continuarán con su respectivo régimen, sin que proceda su alta en el régimen general de la Seguridad Social, por su condición de profesor asociado o visitante.</p> <p>b) Los que estén sujetos al Régimen general de la Seguridad Social o a algún Régimen especial distinto al señalado en el apartado a) serán alta en el Régimen general de la Seguridad Social.</p> <p>c) Los que no se hallen sujetos a ningún régimen de previsión obligatoria serán alta en el Régimen general de la Seguridad Social.</p> <p>2. Los profesores eméritos no serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional vigésima tercera. De la alta inspección del Estado.</b></p> <p>Corresponde al Estado la alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.308 de la Constitución, le competen para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de las competencias propias de las Comunidades Autónomas.</p>	<p>No se modifica</p>
<p><b>Disposición adicional vigésima cuarta. De la integración <del>de estudiantes</del> con discapacidad en las Universidades.</b></p> <p><del>Las Universidades en el desarrollo de la presente Ley tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en lo referente a la integración de estudiantes con discapacidades en la enseñanza universitaria, así como en los procesos de selección de personal al que se refiere la presente Ley.</del></p>	<p><b>Disposición adicional vigésima cuarta. De la integración <u>del alumnado</u> con discapacidad en las universidades.</b></p> <p><u>Las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria.</u></p>
<p><b>Disposición adicional vigésima quinta. Del acceso a la Universidad de los mayores de veinticinco años y de los titulados de Formación Profesional.</b></p> <p>1. El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará las condiciones básicas para el acceso a la Universidad de los mayores de veinticinco años que no reúnan los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 42.</p> <p>2. Para el acceso directo a la Universidad de los titulados de Formación Profesional se estará a lo previsto en <del>el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.</del></p>	<p><b>Disposición adicional vigésima quinta. Del acceso a la Universidad de los mayores de veinticinco años y de los titulados de Formación Profesional.</b></p> <p>1. No se modifica</p> <p>2. Para el acceso directo a la universidad de los titulados de Formación Profesional se estará a lo previsto en la <u>Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.</u></p>
<p><b>Disposición adicional vigésima sexta. De la participación del personal de las Escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Comisiones de habilitación.</b></p> <p><del>El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará las condiciones en que el personal funcionario científico e investigador perteneciente a las Escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrá formar parte de las Comisiones de habilitación para participar en los concursos de acceso a plazas de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.</del></p>	<p><u>La disposición adicional 26ª queda sin contenido</u></p>
<p><b>Disposición adicional vigésima séptima. De la incorporación de profesores de otros niveles educativos a la Universidad.</b></p> <p>El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las Universidades a fin de facilitar la incorporación a los Departamentos universitarios de los profesores de los</p>	<p>No se modifica</p>

<p>cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.</p>	
	<p><b>Disposición adicional vigésima octava. Disponibilidades económicas</b>  <u>El desarrollo temporal de la implantación de las medidas previstas en los artículos 55.3 y 69.2 se hará en función de las disponibilidades económicas de las instituciones responsables de la enseñanza universitaria.</u></p>
	<p><b>Disposición adicional vigésima novena. Funciones de Tutoría.</b>  <u>Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.3 los profesores de universidades públicas podrán realizar funciones de tutoría en universidades no presenciales públicas o financiadas mayoritariamente por Administraciones públicas, en la forma que se determine reglamentariamente.</u></p>
	<p><b>Disposición adicional primera. Del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.</b>  <u>A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud dirigida al Rector de la universidad, los funcionarios y funcionarias Doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen manteniendo todos sus derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no soliciten dicha integración, permanecerán en su situación actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora. Asimismo, podrán presentar la solicitud para obtener la acreditación para catedrático de universidad prevista en el artículo 60.1 de esta Ley Orgánica de Universidades.</u></p>
	<p><b>Disposición adicional segunda. Del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.</b>  <u>A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores y Profesoras Titulares de Universidad, los profesores titulares de escuela universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o que lo obtengan tras su entrada en vigor, y se acrediten específicamente conforme al procedimiento regulado en sus artículos 57 y 59, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas. Par la acreditación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia. Quienes no accedan a la condición de profesor titular de universidad permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.</u></p>
	<p><b>Disposición adicional tercera. De los actuales profesores colaboradores.</b>  <u>Quienes a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como profesoras y profesores colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras.</u></p>
	<p><b>Disposición adicional cuarta. Programas específicos de ayuda.</b>  <u>Las Administraciones públicas competentes, en coordinación con las respectivas universidades, establecerán programas específicos para que las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como las personas con discapacidad, puedan recibir la ayuda personalizada y las adaptaciones en el régimen docente.</u></p>
	<p><b>Disposición adicional quinta. Referencias.</b>  <u>Todas las referencias que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,</u></p>

	<p><u>hace al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se entenderán sustituidas por la referencia al “ministerio competente en materia de universidades”. Asimismo, las referencias realizadas al Consejo de Coordinación Universitaria en los artículos 2.5, 4, 43.1, 44, 68.1, 81.3.b) y 85.1 y en las disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se entenderán realizadas a la Conferencia General de Política Universitaria, y las realizadas en los artículos 46.3, 71.2, 86.1 y en la disposición adicional vigésima quinta de la misma Ley se entenderán realizadas al Consejo de Universidades.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional sexta. Estatuto del personal docente o investigador.</u></b>  <u>El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, aprobará mediante real decreto el estatuto del personal docente o investigador universitario, que incluirá la regulación de una estructura de carrera funcional que esté basada en la obtención de méritos docentes o investigadores, así como las condiciones en las que los profesores o investigadores universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional séptima. Elaboración de planes destinados a personas con necesidades especiales.</u></b>  <u>Las universidades, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, y previa consulta de las organizaciones representativas de los respectivos sectores sociales concernidos, elaborarán los planes que den cumplimiento al mandato previsto en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por esta ley.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional octava. Adaptación de estatutos.</u></b>  <u>Las universidades adaptarán sus estatutos conforme a lo dispuesto en la presente Ley en un plazo máximo de tres años.</u>  <u>Hasta tanto se produzca la adaptación de los estatutos, los Consejos de Gobierno de las universidades podrán aprobar la normativa de aplicación que sea necesaria para el cumplimiento de lo establecido en esta ley.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional novena. Adaptación de las universidades privadas.</u></b>  1. <u>Las universidades privadas deberán adaptar sus normas de organización y funcionamiento a las previsiones de esta Ley que les afecten en el plazo de dos años desde su entrada en vigor.</u>  2. <u>Las universidades privadas deberán alcanzar el porcentaje del 50 por ciento y el 60 por ciento a los que se refiere el artículo 72.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por esta Ley, en el plazo máximo de seis años contado desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional décima. De los habilitados.</u></b>  <u>Quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a la regulación correspondiente contenida en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa de desarrollo se entenderá que poseen la acreditación regulada en la reforma de dicha ley orgánica realizada por esta Ley.</u>  <u>Se entenderá que los habilitados para Catedrático de Escuela Universitaria lo están para Profesor Titular de Universidad.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional undécima. Reconocimiento de efectos civiles.</u></b>  <u>El Gobierno, a propuesta de los ministerios competentes en materia de justicia y universidades, en aplicación de lo establecido en los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, la Federación de Comunidades Israelitas de España,</u></p>

	<p><u>aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, y la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, regulará las condiciones para el reconocimiento de efectos civiles de los títulos académicos relativos a enseñanzas, de nivel universitario, de carácter teológico y de formación de ministros de culto, impartidas en centros docentes de nivel superior dependientes de las mencionadas entidades religiosas.</u></p> <p><u>Lo anterior será extensible al caso de otros acuerdos de cooperación que se concluyan en el futuro, siempre que en ellos se recoja esta posibilidad.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional duodécima. Unidades de igualdad.</u></b></p> <p><u>Las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional decimotercera. Tratamientos.</u></b></p> <p><u>Las autoridades universitarias recibirán el tratamiento de señor o señora, seguido de la denominación del cargo. Los rectores de las universidades recibirán además el tratamiento académico de Rector Magnífico o Rectora Magnífica.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional decimocuarta. Estatuto del estudiante universitario.</u></b></p> <p><u>En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará el Estatuto del estudiante universitario previsto en el artículo 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en la redacción dada por esta Ley.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional decimoquinta. Derechos adquiridos.</u></b></p> <p><u>Los títulos universitarios de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero mantendrán su plena vigencia académica y profesional en los mismos términos en que se establecieron.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional decimosexta. Proyección exterior de las universidades.</u></b></p> <p><u>Para potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y la movilidad interuniversitaria, y con el fin de promover en el exterior la oferta educativa e investigadora de las universidades españolas, contribuir a la mejora de la acogida y estancia de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros en España, y de españoles en el extranjero, y de impulsar el espacio europeo de educación superior y el espacio iberoamericano del conocimiento. Previo informe del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, el Gobierno autorizará la constitución de una fundación del sector público estatal.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional decimoséptima. De los profesores catedráticos de los estudios de ciencias de la actividad física y del deporte.</u></b></p> <p><u>Quienes, perteneciendo al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, hubiesen obtenido una plaza en la plantilla de alguno de los centros del INEF, de carácter estable o permanente (funcionario o laboral fijo) con anterioridad a la incorporación de los estudios universitarios conducentes al título oficial en ciencias de la actividad física y del deporte al catálogo de títulos universitarios oficiales (Real Decreto 1423/1992, de 27 de noviembre) y posean el título de Doctor a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y quienes a la entrada en vigor de esta Ley tengan la categoría de catedrático del INEF de Cataluña, podrán presentar solicitud para tener la acreditación prevista en el artículo 60 de la presente Ley, para acceder al Cuerpo de Catedráticos de Universidad.</u></p> <p><u>Quienes no soliciten dicha integración permanecerán en su situación actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional decimoctava. De los profesores estables o permanentes de</u></b></p>

	<p><b><u>los centros de titularidad pública de enseñanza superior (INEF), creados con anterioridad a la incorporación a la universidad de los estudios conducentes al título oficial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.</u></b>  <u>A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, los profesores funcionarios numerarios de la Escala de Profesores del INEF de Galicia (Administración General, Grupo A) de la Xunta de Galicia que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de doctor o que lo obtengan tras su entrada en vigor y se acrediten específicamente conforme al procedimiento regulado en sus artículos 57 y 59, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas de la Universidad de A Coruña.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional decimonovena. Compensación de precios públicos.</u></b>  <u>Cualquier reducción de tasas universitarias regulada por la Administración competente será compensada anualmente en los presupuestos de la universidad mediante transferencias.</u></p>
	<p><b><u>Disposición adicional vigésima. De los profesores numerarios de escuelas oficiales de náutica.</u></b>  <u>Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica no integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad les será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda.</u></p>
<b>DISPOSICIONES TRANSITORIAS</b>	
<p><b>Disposición transitoria primera. De la constitución del Consejo de Coordinación Universitaria.</b>  El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, adoptará en un plazo no superior a tres meses de la entrada en vigor de esta Ley las medidas necesarias para la constitución del Consejo de Coordinación Universitaria.  Las competencias atribuidas por esta Ley al Consejo de Coordinación Universitaria serán ejercidas por el actual Consejo de Universidades en tanto no se constituya aquél. Una vez constituido, el Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo máximo de seis meses, elaborará su Reglamento. Hasta la aprobación de este Reglamento se regirá por el actual del Consejo de Universidades en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley.</p>	
<p><b>Disposición transitoria segunda. Del Claustro Universitario, del Rector y de la aprobación de los Estatutos de las Universidades públicas.</b>  1. En el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, cada Universidad procederá a la constitución del Claustro Universitario conforme a lo dispuesto en esta Ley para la elaboración de sus Estatutos.  La Junta de Gobierno regulará la composición de dicho Claustro y la normativa para su elección. En el citado Claustro, que tendrá un máximo de trescientos miembros, estarán representados los distintos sectores de la comunidad universitaria, siendo como mínimo el cincuenta y uno por ciento de sus miembros funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios.  Elegido el Claustro Universitario, a que se refiere el párrafo primero, se constituirá un Consejo de Gobierno provisional de acuerdo con las previsiones de la presente Ley.  El Claustro Universitario elegido elaborará los Estatutos, de acuerdo con el procedimiento y con el régimen de mayorías que el mismo establezca, en el plazo máximo de nueve meses a partir de su constitución.  Transcurrido este plazo sin que la Universidad hubiere presentado los Estatutos para su control de legalidad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acordará unos Estatutos en el plazo máximo de tres meses.</p>	

<p>Los Claustros de las Universidades que tuvieran que renovarse en el período comprendido entre la entrada en vigor de la presente Ley y la constitución del Claustro Universitario podrán permanecer hasta dicha constitución.</p> <p>2. Los Rectores que deban ser renovados, por finalización del mandato o por vacante, en el período comprendido entre la entrada en vigor de esta Ley y la aprobación de los Estatutos, lo serán de conformidad con las previsiones del artículo 20, si bien el procedimiento, cuya regulación se atribuye en dicho artículo a los Estatutos, será establecido por la Junta de Gobierno o, en su caso, por el Consejo de Gobierno.</p> <p>En todo caso, el voto conjunto de los profesores funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios tendrá el valor de, al menos, el cincuenta y uno por ciento del total del voto a candidaturas válidamente emitido por la comunidad universitaria.</p> <p>3. Los Estatutos establecerán las disposiciones que regulen la continuidad, en su caso, del Claustro elegido conforme a lo establecido en el apartado 1, hasta su elección de acuerdo con lo dispuesto en los propios Estatutos. Asimismo, los indicados Estatutos dispondrán la continuidad, en su caso, de los respectivos Rectores hasta la finalización de su mandato conforme a los actuales Estatutos, o la elección de nuevo Rector.</p> <p>4. Hasta la publicación de los Estatutos a que se refiere el apartado 1, la Junta de Gobierno o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Universidad adoptará las normas oportunas para la aplicación de lo establecido en la presente Ley en todo aquello en que los actuales Estatutos se opongan a la misma.</p>	
<p><b>Disposición transitoria tercera. De la adaptación de las Universidades privadas a la presente Ley.</b></p> <p>Las Universidades privadas actualmente existentes deberán adaptarse a las previsiones de esta Ley en el plazo de quince meses desde su entrada en vigor.</p> <p>No obstante, el porcentaje a que se refiere el apartado 2 del artículo 72 habrá de alcanzarse en el plazo máximo de cinco años, a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley.</p>	
<p><b>Disposición transitoria cuarta. De los actuales ayudantes.</b></p> <p>Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen contratados en Universidades públicas como ayudantes, podrán permanecer en su misma situación hasta la extinción del contrato y de su eventual renovación, conforme a la legislación que les venía siendo aplicable. A partir de ese momento, podrán vincularse a una Universidad pública en alguna de las categorías de personal contratado previstas en la presente Ley y conforme a lo establecido en ella, con exclusión de la de ayudante. No obstante, en el caso de los ayudantes que estén en posesión del título de Doctor para ser contratados como profesor ayudante doctor no les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 50 sobre la desvinculación de la Universidad contratante durante dos años.</p>	
<p><b>Disposición transitoria quinta. De los actuales profesores asociados.</b></p> <p>1. Quienes a la entrada en vigor de esta Ley se hallen contratados en universidades públicas como profesores asociados podrán permanecer en su misma situación conforme a la legislación que les venía siendo aplicable, hasta la finalización de sus actuales contratos. No obstante, dichos contratos podrán ser renovados conforme a dicha legislación, sin que su permanencia en esta situación pueda prolongarse más de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.</p> <p>A partir de ese momento, sólo podrán ser contratados en los términos previstos en este Ley. No obstante, en el caso de los profesores asociados que estén en posesión</p>	

<p>del título de Doctor, para ser contratados como profesor ayudante doctor no les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 50 sobre la desvinculación de la universidad contratante durante dos años.</p> <p>2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los actuales profesores asociados cuya plaza y nombramiento traiga causa del apartado 2 del artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que se regirán por lo establecido en la disposición adicional duodécima.</p>	
<p><b>Disposición transitoria sexta. De los Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas.</b></p> <p>Los funcionarios del cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas declarado a extinguir por la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, no integrados dentro del cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, permanecerán en el cuerpo de origen, sin perjuicio de su derecho a integrarse en el mencionado cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en sus propias plazas y realizando las mismas funciones que vienen desarrollando, siempre que en el plazo de cinco años desde el 1 de enero de 2000, fecha de la entrada en vigor de la citada Ley 55/1999, reúnan las condiciones de titulación exigidas para acceder a él.</p>	
<p><b>Disposición transitoria séptima. De los Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica.</b></p> <p>Los funcionarios del cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica, declarado a extinguir por el apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, no integrados dentro del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en virtud de lo establecido en la citada Ley, quedan integrados en sus propias plazas, en el mencionado cuerpo, siempre que estén en posesión del título de Doctor, o cuando lo obtengan en el plazo de cinco años, contados a partir de la publicación de la presente Ley.</p>	
<p><b>Disposición transitoria octava. De la aplicación de las normas establecidas para la habilitación y para los concursos de acceso para proveer plazas de los cuerpos de funcionarios docentes.</b></p> <p>1. Las normas establecidas en la sección segunda del capítulo I del Título IX para la habilitación y para el acceso a plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios deberán cumplirse en todas las convocatorias que se publiquen a partir de la fecha de publicación de esta Ley en el "Boletín Oficial del Estado". Hasta tanto se produzca la aprobación de los Estatutos, a que se refiere el apartado 1 de la disposición transitoria segunda, las actuales Juntas de Gobierno de las Universidades adoptarán las medidas necesarias para hacer posible la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior.</p> <p>2. Los concursos cuyas convocatorias hayan sido publicadas con anterioridad a la publicación de esta Ley en el "Boletín Oficial del Estado" se realizarán con arreglo a las normas contenidas en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto.</p>	
	<p><b><u>Disposición transitoria primera. Sustitución del sistema de habilitación.</u></b> <u>Hasta un año después de la resolución de las últimas pruebas de habilitación convocadas, las universidades podrán decidir la convocatoria de plazas para los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad mediante concurso</u></p>

	<u>de acceso entre habilitados comunicándolo a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, todo ello según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa de desarrollo, que, a estos efectos, se considerará vigente.</u>
	<b>Disposición transitoria segunda. Contratación de profesores colaboradores.</b> <u>El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá reglamentariamente las condiciones y plazos en los que, de forma excepcional, las universidades podrán contratar profesores colaboradores entre diplomados, arquitectos técnicos o ingenieros técnicos que, en todo caso, deberán contar con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.</u>
	<b>Disposición transitoria tercera. Extinción de las enseñanzas anteriores.</b> <u>Hasta tanto el Gobierno determine las condiciones y la fecha de la definitiva extinción de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de la ordenación universitaria anterior, las universidades podrán seguir impartiendo dichas enseñanzas de acuerdo con su normativa aplicable.</u>
<b>DISPOSICIONES DEROGATORIAS</b>	
<b>Disposición derogatoria única. Derogación normativa.</b> 1. Queda derogada la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en cuanto mantengan la vigencia, la Ley 8/1983, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en materia de órganos de gobierno de las Universidades, el Decreto 2551/1972, de 21 de julio, sobre Colegios Universitarios, y el Decreto 2293/1973, de 17 de agosto, por el que se regulan las Escuelas Universitarias, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. Asimismo, queda derogada la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 23 de julio. 2. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, en tanto se aprueban los nuevos Estatutos conformados a esta Ley, la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, continuará en vigor en cuanto se refiera a órganos de gobierno y representación de las Universidades.	
<b>DISPOSICIONES FINALES</b>	
<b>Disposición final segunda. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad.</b> El artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda redactado como sigue: "Artículo 105. 1. En el marco de la planificación asistencial y docente de las Administraciones públicas, el régimen de concertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias podrá establecer la vinculación de determinadas plazas asistenciales de la institución sanitaria con plazas docentes de los cuerpos de profesores de Universidad.  Las plazas así vinculadas se proveerán por concurso entre quienes hayan sido seleccionados en los concursos de acceso a los correspondientes cuerpos de funcionarios docentes universitarios, conforme a las normas que les son propias.  Quienes participen en <del>las pruebas de habilitación</del> , previas a los mencionados concursos, además de reunir los requisitos exigidos en las indicadas normas,	<b>Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.</b> El artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda redactado del siguiente modo: "Artículo 105. 1. En el marco de la planificación asistencial y docente de las Administraciones públicas, el régimen de concertos entre las universidades y las instituciones sanitarias podrá establecer la vinculación de determinadas plazas asistenciales de la institución sanitaria con plazas docentes de los cuerpos de profesores de universidad <u>y con plazas de profesor contratado doctor.</u>  Las plazas así vinculadas se proveerán por concurso entre quienes hayan sido seleccionados en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios <u>o a plazas de profesor contratado doctor,</u> conforme a las normas que les son propias. Quienes participen en <u>los procesos de acreditación nacional</u> , previas a los mencionados concursos, además de reunir los requisitos exigidos en las indicadas

<p>acreditarán estar en posesión del título de <del>médico especialista o de farmacéutico especialista</del> que proceda y cumplir las exigencias que, en cuanto a su cualificación asistencial, se determinen reglamentariamente. <del>En la primera de dichas pruebas, las Comisiones deberán valorar los méritos e historial académico e investigador y los propios de la labor asistencial de los candidatos, en la forma que reglamentariamente se establezca.</del></p> <p>En las Comisiones que resuelvan los mencionados concursos de acceso, dos de sus miembros serán elegidos por sorteo público por la institución sanitaria correspondiente.</p> <p>2. Los conciertos podrán establecer, asimismo, un número de plazas de profesores asociados que deberá cubrirse por personal asistencial que esté prestando servicios en la institución sanitaria concertada. Este número no será tenido en cuenta a efectos del porcentaje de contratados que rige para las universidades públicas. Estos profesores asociados se regirán por las normas propias de los profesores asociados de la universidad, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en cuanto al régimen temporal de sus contratos. Los estatutos de la universidad deberán recoger fórmulas específicas para regular la participación de estos profesores en los órganos de gobierno de la universidad.</p> <p>3. Los conciertos establecerán, asimismo, el número de plazas de ayudante y profesor ayudante doctor, en las relaciones de puestos de trabajo de las Universidades públicas, que deberán cubrirse mediante concursos públicos entre profesionales sanitarios que hubieran obtenido el título de especialista en los tres años anteriores a la convocatoria del concurso."</p>	<p>normas, acreditarán estar en posesión del título de <u>Especialista en Ciencias de la Salud</u> que proceda y cumplir las exigencias que, en cuanto a su cualificación asistencial, se determinen reglamentariamente. <u>Asimismo, las comisiones deberán valorar los méritos e historial académico e investigador y los propios de la labor asistencial de los candidatos y candidatas, en la forma que reglamentariamente se establezca.</u></p> <p>En las comisiones que resuelvan los mencionados concursos de acceso, dos de sus miembros serán elegidos por sorteo público por la institución sanitaria correspondiente.</p> <p>2. Los conciertos podrán establecer, asimismo, un número de plazas de profesores asociados que deberá cubrirse por personal asistencial que esté prestando servicios en la institución sanitaria concertada. Este número no será tenido en cuenta a efectos del porcentaje de contratados que rige para las universidades públicas. Estos profesores asociados se regirán por las normas propias de los profesores asociados de la universidad, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en cuanto al régimen temporal de sus contratos. Los estatutos de la universidad deberán recoger fórmulas específicas para regular la participación de estos profesores <u>y profesoras</u> en los órganos de gobierno de la universidad.</p> <p>3. Los conciertos establecerán, asimismo, el número de plazas de ayudante, profesor ayudante doctor <u>y profesor contratado doctor,</u> en las relaciones de puestos de trabajo de las universidades públicas, que deberán cubrirse mediante concursos públicos entre profesionales sanitarios que hubieran obtenido el título de especialista en los tres años anteriores a la convocatoria del concurso."</p>
	<p><b><u>Disposición final segunda. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.</u></b>  <u>El párrafo a) del apartado 3 del artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, queda redactado del siguiente modo:</u>  <u>"a) Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con dedicación a tiempo completo. La formación mediante residencia será incompatible con cualquier otra actividad profesional. También será incompatible con cualquier actividad formativa, siempre que se ésta desarrolle dentro de la jornada laboral de la relación laboral especial del residente".</u></p>
<p><b>Disposición final primera. Título competencial.</b>  La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1, 15a, 18' y 30' de la Constitución.</p>	<p><b>Disposición final tercera. Título competencial.</b>  Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado conforme al artículo 149.1.1.<sup>a</sup>, 15.<sup>a</sup>, 18.<sup>a</sup> y 30.<sup>a</sup> de la Constitución.</p>
<p><b>Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.</b>  Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.</p>	<p><b>Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.</b>  1. Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.  2. <u>En el plazo máximo de cuatro meses tras la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará el reglamento por el que se regula la práctica de la acreditación y los concursos de acceso regulados en los artículos 57 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en la redacción efectuada por esta Ley.</u></p>
<p><b>Disposición final cuarta. Carácter de Ley Orgánica de la presente Ley.</b>  La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes preceptos: apartado 1 del artículo 3, los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 4, los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 6, todos ellos del Título I; los artículos 7, 8, 9 y 10 del capítulo I del Título II; el capítulo I del Título III; los Títulos IV y V; el artículo 36 del Título VI, el</p>	<p><b>Disposición final sexta. Carácter de ley orgánica.</b>  <u>Tienen el carácter de ley orgánica los apartados ocho, veintitrés, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis, cuarenta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, sesenta y dos, setenta y tres, los artículos 87 t 88 del apartado setenta y ocho, el ochenta y dos, el ochenta y cinco y el</u></p>

<p>artículo 41 del Título VII, el apartado 4 del artículo 46 del Título VIII; el capítulo I del Título IX; el Título X; el Título XI; el Título XII (salvo el apartado 2 del artículo 85); el artículo 89 del Título XIII, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta (salvo el apartado 2), quinta, sexta, séptima, octava, décima, undécima, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena, vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima sexta y vigésima séptima; las disposiciones transitorias primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava; y las disposiciones finales primera, segunda, tercera y quinta.</p>	<p><u>ochenta y seis del artículo único, así como la disposición adicional novena y esta disposición final. Los demás preceptos no tienen carácter orgánico.</u></p>
<p><b>Disposición final quinta. Entrada en vigor.</b>  La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", salvo los apartados 2 y 3 del artículo 42, que entrarán en vigor en el momento en que la Ley 30/1974, de 24 de julio, sobre pruebas de aptitud para el acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Colegios Universitarios y Escuelas Universitarias, con valor reglamentario en virtud del apartado 4 de la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, sea expresamente derogada. Entre tanto, se mantendrá vigente el actual sistema de acceso a los estudios universitarios.</p>	